

La Serena, a ocho de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Que se instruyó esta causa Rol N° 1-2011 (Antofagasta), para investigar el delito de homicidio calificado, en grado consumado, cometido en contra de Vino Fidel Valdés Morales y René Paredes Cortínez, así como para determinar la responsabilidad penal que en ese hecho cupo a Hernán Gilberto Salinas Solari, cédula de identidad N°4.889.650-2, chileno, nacido en Quinta Normal el 19 de junio de 1942, de 78 años de edad, casado, Subprefecto en retiro de la Policía de Investigaciones, domiciliado en Doctor Emilio San Martino N° 2448, comuna de Quinta Normal, Santiago; Ricardo Jilberto Gomez Centella, cédula de identidad N° 4.513.455-5, chileno, nacido en Pica el 22 de mayo de 1940, de 80 años de edad, soltero, Comisario en retiro de la Policía de Investigaciones, con domicilio en calle Balmaceda N° 298, comuna de Pica, Iquique; Sergio Leonardo Méndez Henríquez, cédula de identidad N° 3.578.933-2, chileno, nacido en Puerto Saavedra el 26 de octubre de 1935, de 84 años de edad, casado, Subcomisario en retiro de la Policía de Investigaciones, domiciliado en calle Pedro de Valdivia N° 490, comuna de Concón, Viña del Mar; Osvaldo Carmona Otero, cédula de identidad N° 5.321.268-9, chileno, nacido en Santiago el 30 de abril de 1944, de 76 años de edad, casado, Prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones, domiciliado en calle General Jofré N° 346, dpto. 101-A, comuna de Santiago Centro, Santiago; Nelson Nicks Ávalos Rauld, cédula de identidad N° 4.209.833-7, chileno, nacido en Oficina Pedro de Valdivia el 18 de agosto de 1940, de 79 años de edad, casado, Subcomisario en retiro de la Policía de Investigaciones, con domicilio en calle República Argentina N° 615, Centenario, Los Andes; y Luciano Astete Almendras, cédula

de identidad N° 2.269.307-7, chileno, nacido en Antuco el 7 de noviembre de 1925, 94 años de edad, casado, Teniente Coronel en retiro de Carabineros de Chile, domiciliado en calle 10 Norte N° 563-B, dpto. 41, Viña del Mar.

El proceso se inició por querella criminal de fojas 1, por los delitos de homicidio y asociación ilícita, interpuesta por doña Alicia Lira Matus, en su calidad de representante de la Organización No Gubernamental, ONG, denominada "Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos", (AFEP) con el objeto de que se investigue el hecho y las circunstancias que ocasionaron la muerte de Lino (Vino) Fidel Valdés Morales, así como la identidad de los responsables, en especial de agentes del Ejército de Chile y de la Policía de Investigaciones de Tocopilla, se acoja a tramitación, se dicte auto de procesamiento y en definitiva se aplique a los responsables el máximo de la pena legal, con costas.

A fojas 66 se acumuló a la presente causa querella criminal de fojas 40, interpuesta por doña Alicia Lira Matus, en igual calidad, para que se investigue el hecho y las circunstancias que ocasionaron la muerte de René Paredes Cortínez, así como la identidad de los agentes del Estado que le dieron muerte, que refiere son los integrantes del Ejército de Chile y Policía de Investigaciones, y en contra de todos quienes aparezcan como responsables, acogerla a tramitación, dictar auto de procesamiento en su contra y aplicarles el máximo de la pena legal, con costas.

A fojas 306, don Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior, en virtud del Programa establecido por la Ley 19.123, dedujo querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices y encubridores de los delitos

consumados de secuestro simple y homicidio calificado, cometidos en contra de Lino (Vino) Valdés Morales y René Paredes Cortínez, perpetrados el 7 de octubre de 1973 en la ciudad de Tocopilla.

A fojas 891 se sometió a proceso a Luciano Astete Almendras, José Ricardo Fuentes Berrocal, Sergio Leonardo Méndez Henríquez, Osvaldo Carmona Otero, Nelson Nicks Ávalos Rauld y Hernán Gilberto Salinas Solari, como autores del delito de homicidio calificado cometido en contra de Vino Fidel Valdés Morales y René Paredes Cortínez, hecho perpetrado el 7 de octubre de 1973 en la ciudad de Tocopilla.

A fojas 1.319 se dictó sobreseimiento definitivo parcial respecto de José Ricardo Fuentes Berrocal.

A fojas 1.320 se sometió a proceso a Ricardo Gilberto Gómez Centella como autor del delito de homicidio calificado cometido en contra de Vino Fidel Valdés Morales y René Paredes Cortínez, hecho acaecido el 7 de octubre de 1973 en la ciudad de Tocopilla. Asimismo, se rectificaron los hechos establecidos en el auto de procesamiento de fojas 891, respecto de Luciano Astete Almendras, Sergio Leonardo Méndez Henríquez, Osvaldo Carmona Otero, Nelson Nicks Ávalos Rauld y Hernán Gilberto Salinas Solari.

A fojas 1.897 se declaró cerrado el sumario.

A fojas 1.898 se dictó acusación judicial en contra de Luciano Astete Almendras, Osvaldo Carmona Otero, Sergio Leonardo Méndez Henríquez, Nelson Nicks Ávalos Rauld, Hernán Gilberto Salinas Solari y Ricardo Gilberto Gómez Centella, como autores del delito de homicidio calificado de Vino Fidel Valdés Morales y René Paredes Cortínez, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancias primera y cuarta del Código Penal, en su

redacción de la época, en grado consumado, cometido el 7 de octubre de 1973 en la ciudad de Tocopilla.

A fojas 1.905 la abogada Adriana Rojas Pérez, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), dedujo acusación particular en contra de Luciano Astete Almendras, Osvaldo Carmona Otero, Sergio Leonardo Méndez Henríquez, Nelson Nicks Ávalos Rauld, Hernán Gilberto Salinas Solari y Ricardo Gilberto Gómez Centella, por el delito de homicidio calificado, en grado consumado, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancias primera y cuarta del Código Penal, invocando en contra de los acusados las circunstancias agravantes previstas en los numerales 8, 10 y 11 del artículo 12 del Código Penal, solicitando que sean condenados a la pena de presidio perpetuo, más accesorias legales y costas.

A fojas 1.913 el abogado Álvaro Aburto Guerrero, en representación del Programa de Derechos Humanos, dedujo acusación particular en contra de Luciano Astete Almendras, Osvaldo Carmona Otero, Sergio Leonardo Méndez Henríquez, Nelson Nicks Ávalos Rauld, Hernán Gilberto Salinas Solari y Ricardo Gilberto Gómez Centella, por el delito de homicidio calificado, en grado de desarrollo consumado, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancias primera y cuarta del Código Penal, invocando en contra de los acusados las circunstancias agravantes previstas en los numerales 8 y 12 del artículo 12 del Código Penal, y la aplicación de la regla prevista en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, solicitando que, por tanto, sean condenados a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo.

A fojas 1.942 el abogado Juan Carlos Manns Giglio, en representación de los acusados Sergio Leonardo Méndez Henríquez, Nelson Nicks Ávalos Rauld, Hernán Gilberto

Salinas Solari y Ricardo Gilberto Gómez Centella, contestó la acusación fiscal y las acusaciones particulares. Alegó como excepción de fondo la prescripción de la acción penal y la pena, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 93, 94 y 95 del Código Penal. Y, para el evento de dictarse sentencia condenatoria, invocó la circunstancia atenuante prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, pidiendo que se aplique a sus representados lo prescrito en el artículo 103 del mismo Código y se les otorgue el beneficio de la libertad vigilada establecido en la Ley 18.216.

A fojas 1.956 la abogada Katherine Gnecco Sandoval, en representación del acusado Osvaldo Carmona Otero, opuso la excepción de previo y especial pronunciamiento prevista en el artículo 433 N° 7 del Código de Procedimiento Penal, esto es, la prescripción de la acción penal; en subsidio, contestó la acusación fiscal y las acusaciones particulares, oponiendo como defensa de fondo la excepción de prescripción de la acción penal del artículo 433 N° 7 del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 434 del mismo Código. Y, para el evento de dictarse sentencia condenatoria, invocó las circunstancias atenuantes del artículo 11 N° 6 y 9 del Código Penal, pidiendo se aplique a su representado lo prescrito en el artículo 103 del Código Penal y se le otorgue alguno de los beneficios contemplados en la Ley 18.216.

A fojas 2.000 el abogado Hernán Benavides Navarro, en representación del acusado Luciano Astete Almendras, opuso las excepciones de previo y especial pronunciamiento de amnistía y de prescripción de la acción penal, establecidas en el artículo 433 N° 6 y 7 del Código de Procedimiento Penal, respectivamente; en subsidio, contestó la acusación fiscal y las acusaciones particulares, oponiendo como

defensas de fondo las excepciones de amnistía y de prescripción de la acción penal ya enunciadas, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 434 del mismo Código. Solicitó que, en caso de dictarse sentencia condenatoria, se apliquen las eximentes de responsabilidad penal prescritas en los numerales 9 y 10 del artículo 10 del Código Penal. En subsidio, se consideren ambas como circunstancias atenuantes de responsabilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 N° 1 del mismo texto legal. Finalmente, requirió que se aplicara la minorante de responsabilidad del artículo 11 N° 6 del Código Penal, y que ésta se considere como muy calificada, pidiendo se aplique lo prescrito por el artículo 103 del Código punitivo, y se conceda algunos de los beneficios de la Ley 18.216, eximiendo a su representado del pago de multas y costas de la causa.

A fojas 2.070 se recibió la causa a prueba.

A fojas 2.400 se trajeron los autos para dictar fallo.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL:

PRIMERO: Que a fojas 1.956 la abogada Katherine Gnecco Sandoval, en representación del acusado Osvaldo Carmona Otero; y a fojas 2.000 el abogado Hernán Benavides Navarro, en representación del acusado Luciano Astete Almendras, invocaron en favor de sus defendidos como excepción de previo y especial pronunciamiento la prevista en el artículo 433 N° 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 93 N° 6 del Código Penal, esto es, la prescripción de la acción penal, fundados en que el hecho que dio origen a este proceso se produjo el 7 de octubre de 1973 y, desde esa fecha, han transcurrido más de

45 años, por lo cual la acción penal ya se encuentra prescrita. Además, indicaron que, incluso si el plazo se considerara suspendido durante el régimen militar, o se comenzara a contar a partir de la interposición de la querrela que dio origen a la investigación de la presente causa, el plazo de prescripción de la acción, de todas formas, habría transcurrido completamente.

SEGUNDO: Que la abogada Adriana Rojas Pérez, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP, evacuó el traslado a fojas 2.030 y 2.042, solicitando el rechazo de la excepción de previo y especial pronunciamiento deducida, por tratarse en la especie de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme al ordenamiento jurídico interno, así como a las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, siendo una de las principales consecuencias de ello que resultan imprescriptibles ante el Derecho Internacional General, cuestión que ha sido largamente reconocida por la Excma. Corte Suprema, a través de reiterados fallos, así como por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su última revisión al Estado de Chile, apareciendo la alegación de esta excepción por las defensas de los acusados como una nueva forma de contribuir a la dilación del procedimiento, que busca perpetuar la impunidad por los crímenes investigados en la presente causa.

A fojas 2.055 el abogado Álvaro Aburto Guerrero, del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, evacuó el traslado solicitando el rechazo de la excepción de previo y especial pronunciamiento deducida, por la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema que, valiéndose del Derecho Internacional de los

Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ha rechazado la aplicación del instituto de la prescripción; añadiendo que nadie puede escapar al castigo por crímenes del Derecho Internacional por el hecho de alegar que el acto era legal conforme al derecho interno, o favorecerse de sus propias amnistías o por haberse granjeado las condiciones para su prescripción, lo que repugna a las normas de ius cogens, imperativas, inderogables y vinculantes para el Estado de Chile.

TERCERO: Que, los Convenios de Ginebra de 1949 se ratificaron en Chile en 1951, por consiguiente, a la fecha del delito investigado en estos autos ya eran leyes de la República. Y teniendo en consideración que en Chile producido el golpe de estado se dictó el Decreto Ley N° 3 de 11 de septiembre de 1973 que decretó el estado de sitio y al día siguiente, esto es, el 12 de septiembre de 1973 se dictó el Decreto Ley N° 5, aclaratorio del anterior que señaló: "Declárase, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país, debe entenderse "estado o tiempo de guerra" para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general para todos los demás efectos de dicha legislación", lo que fue sistematizado posteriormente en el Decreto Ley N° 640 de 2 de septiembre de 1974; de lo que se colige que el artículo 3° del IV Convenio de Ginebra se encontraba vigente y éste sostiene que: "En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes contendientes tendrá obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: "1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas

que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo". En seguida se añade que: "A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados".

CUARTO: Que, en el mismo sentido, cabe tener presente que, junto a los Convenios de Ginebra, que dan pie a la tesis de la guerra interna y, por ende, a la aplicación del derecho internacional humanitario, no podemos abstraernos de la realidad fáctica que siempre han existido normas que forman parte de los conocidos Principios Generales del Derecho Internacional sobre crímenes de lesa humanidad.

Por ello existe una obligación convencional para los Estados Partes de las Naciones Unidas -y Chile es uno de ellos- de adoptar medidas legales para procurar derogar instituciones como la prescripción y la amnistía en Delitos de Lesa Humanidad, y ante este deber, surge la Convención Sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

Esta imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad germina como Principio o Norma de Derecho Internacional General (*ius Cogens*), conforme al tratamiento dogmático y convencional de carácter universal y que, por lo demás, es dominante en los tribunales nacionales partícipes de la Organización de las Naciones Unidas, además de los internacionales con jurisdicción respecto de Crímenes de Lesa Humanidad, en síntesis, estamos ante una situación de preeminencia normativa, de respeto por la dignidad de las personas y de su obligatoriedad en el ámbito interno, cuestión que se refrendó en nuestro ordenamiento jurídico por el reformado artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, de este modo, los Principios Generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos deben entenderse integrados a la normativa constitucional, porque en su oportunidad en el ya incorporado Tratado de Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificado el 9 de abril de 1981 y promulgado mediante Decreto Supremo N°381 de 1981, Chile reconoció enteramente la primacía del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno, lo que impide considerar la existencia de un juicio fundado para no cumplir de buena fe las obligaciones contraídas -artículo 26 de esa Convención- apoyando de esta forma lo dispuesto por su artículo 27, que decreta que un Estado Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, especialmente los tratados de derechos humanos, que no hacen posible a los Estados Partes denunciarlo o terminarlo, puesto que las obligaciones se establecen en beneficio de las personas y no de los Estados, encontrándose sujetos a un control internacional.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados aclaró la observancia del ordenamiento jurídico interno al principio universal del "ius cogens", al definirlo en el artículo 53 de la Convención, como norma que no admite acuerdo en contrario y sólo puede ser modificada por norma ulterior de Derecho Internacional General que tenga el mismo carácter, esto es, debe ser respetada de igual forma que un tratado ratificado por Chile, ya no por el modo de su modificación, sino porque siendo su entidad tal, que el propio artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, determina que es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de Derecho Internacional General, primacía que ha reconocido permanentemente en sus sentencias la Excma. Corte Suprema.

SEXTO: Que, por lo que se ha venido considerando, este sentenciador estima que prevalece en el caso de autos, la norma internacional de Derecho Internacional General que determina que, es incompatible normativamente aplicar la prescripción de la acción penal conforme al Derecho Interno a Crímenes de Lesa Humanidad, porque se trata de normas de Ius Cogens donde la penalización de estos crímenes es obligatoria. Estamos ante una norma imperativa de Derecho Internacional General, recepcionada constitucionalmente en Chile por vía de un Tratado Internacional vinculante desde antes, como Principio General del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

SÉPTIMO: Que, a modo de resumen, cabe sostener que en la época en que ocurrieron los acontecimientos que dieron origen a este proceso, el territorio nacional se encontraba, en la realidad y jurídicamente, en estado de guerra interna, razón que resulta suficiente para tener por establecido que en Chile existía un "conflicto armado no

internacional", en los términos del artículo 3° común para los Convenios de Ginebra y, por lo tanto, resultan plenamente aplicables al delito indagado los Convenios de Ginebra de 1949. Así, el Estado de Chile se impuso, al suscribir y ratificar los citados Convenios en el año 1951, la obligación de garantizar la seguridad de las personas que pudieren tener participación en conflictos armados dentro de su territorio, especialmente si fueren detenidas, quedando vedadas las medidas tendientes a amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o lograr la impunidad de sus autores, renunciando a la facultad para exonerarse a sí mismos o a otro Estado de responsabilidades incurridas por ellos, teniendo especialmente presente que los acuerdos internacionales deben cumplirse de buena fe, de esta manera aplicar la institución de la prescripción de la acción penal que regula el derecho interno implica abogar por la impunidad de sus responsables, conculcando así el artículo 148 del IV Convenio de Ginebra, norma que ha sido interpretada en el sentido de que el Estado que cometió la ofensa grave, que es responsable de compensar económicamente los daños producidos, sigue siendo responsable de ello aunque no haya castigado a quien efectivamente cometió la infracción y que le está vedado a los Estados pactar renunciaciones o liberaciones a dicha obligación de pagar compensaciones económicas en los tratados de paz que suscriban.

OCTAVO: Que, la evolución del tratamiento de los derechos humanos hace imperativa la mentada imprescriptibilidad, por cuanto la normativa internacional que se ha generado al respecto es obligatoria para el derecho chileno y en virtud de ella es inadmisibles cualquier causal de extinción que pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones

graves de los derechos humanos. Todo ello lleva al rechazo de la excepción opuesta por los acusados referidos.

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO DE AMNISTÍA:

NOVENO: Que a fojas 2.000, el abogado Hernán Benavides Navarro, en representación del acusado Luciano Astete Almendras, invocó en favor de su defendido como excepción de previo y especial pronunciamiento la prevista en el artículo 433 N° 6 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 93 N° 3 del Código Penal, esto es, la amnistía, fundado en que el artículo 1 del Decreto Ley N° 2191 concede amnistía a todas las personas a quienes se les atribuye responsabilidad penal en hechos delictuosos acaecidos durante la vigencia del referido Decreto Ley, como sería el caso de autos; y que no es aplicable a este respecto la normativa internacional, que transformaría dichos delitos en no amnistiabiles, puesto que Chile no se encontraba en estado de guerra en el período en que el ilícito investigado habría acaecido, al no existir en la época ejércitos beligerantes ni conflicto armado, requisito indispensable para la aplicación de los Convenios de Ginebra.

DÉCIMO: Que a fojas 2.030 evacuó traslado la abogada Adriana Rojas Pérez, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, solicitando el rechazo de la excepción deducida, por ser los hechos objeto de acusación crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, y, como tales, suponer para el Estado un deber de investigación y sanción, que impide dar lugar a la amnistía, la prescripción o la cosa juzgada fraudulenta, lo que constituye una norma de "ius cogens" o Derecho Internacional Imperativo, que, por lo mismo, no puede dejar

de ser observada por el Estado, tal como lo ha reconocido en numerosos fallos la Corte Suprema.

DÉCIMO PRIMERO: Que a fojas 2.055 evacuó traslado el abogado Álvaro Aburto Guerrero, en representación del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicitando el rechazo de la excepción deducida, toda vez que el Derecho Internacional no reconoce amnistías ni prescripciones, y ninguna otra causal que exima de responsabilidad penal, tratándose de crímenes de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, como lo sería el delito de autos, añadiendo que también le son ajenas a estos delitos las amnistías propias e impropias y las prescripciones totales o graduales. Y que esto es así, no por la aplicación de un Tratado en específico, pues antes de los tratados ya existían obligaciones internacionales vinculantes para los Estados, una por ser norma de ius cogens, y, por tanto, imperantes, inderogables y vinculantes para el Estado de Chile.

DÉCIMO SEGUNDO: Que la circunstancia invocada por el incidentista de no haber existido estado de guerra interna a la época de ocurrencia de los hechos aquí investigados no tiene sustento y por el contrario se cae todo el entramado sobre el cual construye sus alegaciones, resultando aplicable, en consecuencia, los Convenios de Ginebra. En efecto, como ya se indicó más arriba en esta sentencia, en Chile producido el golpe de estado se dictó el Decreto Ley N° 3 de 11 de septiembre de 1973 que decretó el estado de sitio y al día siguiente, esto es, el 12 de septiembre de 1973 se dictó el Decreto Ley N° 5, aclaratorio del anterior que señaló: "Declárase, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país, debe entenderse "estado o tiempo de guerra"

para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general para todos los demás efectos de dicha legislación", en el mismo sentido, al sistematizar los estados de excepción, el artículo 6° del Decreto Ley N° 640, describió que "la declaración del Estado de Sitio podrá decretarse en alguno de los siguientes grados: "a) Estado de Sitio por situación de Guerra Interna o Externa. "b) Estado de Sitio en Grado de Defensa Interna, que procederá en caso de conmoción interior provocada por fuerzas rebeldes o sediciosas que se encuentren organizadas o por organizarse, ya sea en forma abierta o en la clandestinidad. "c) Estado de Sitio en grado de Seguridad Interior, que procederá cuando la conmoción sea provocada por fuerzas rebeldes o sediciosas que no se encuentren organizadas, y "d) Estado de Sitio en grado de Simple Conmoción interior, que procederá en los demás casos previstos en la legislación vigente". Asimismo el artículo 7° de ese cuerpo legal dispone que: "en los casos en que el Estado de Sitio se declare por peligro de ataque exterior, de invasión o por conmoción interior en grado de Defensa Interna, regirán las disposiciones legales contenidas en el Título III del Libro I y en el Título IV del Libro II del Código de Justicia Militar y se aplicará, cuando corresponda, la penalidad del tiempo de guerra". Cabe señalar que el Libro I, Título III, del Código de Justicia Militar se ocupa "De los Tribunales Militares en tiempo de Guerra" (Arts. 71 a 91) y que el Título IV del Libro II, por su parte, en los Arts. 180 a 194, trata acerca "Del procedimiento penal en tiempo de Guerra".

DÉCIMO TERCERO: Que, como ya se indicó, en Chile los Convenios de Ginebra se ratificaron en 1951, por consiguiente, a la fecha del delito investigado en estos autos ya eran Leyes de la República y como ha quedado

establecido en el fundamento precedente, sí se declaró un estado de guerra interna, de lo que se hace mención expresa en los decretos leyes mencionados, de tal manera que, el artículo 3° del IV Convenio de Ginebra se encontraba vigente y sostiene que "En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes contendientes tendrá obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: "1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo". "A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados".

DÉCIMO CUARTO: Que, tal como se señaló en los considerandos tercero a octavo de esta sentencia, la aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949, vigentes a la época de perpetración de los hechos, y los Principios Generales del Derecho Internacional sobre crímenes de lesa

humanidad, integrados a la normativa constitucional según lo razonado, implican la existencia de una obligación convencional para los Estados Partes de las Naciones Unidas, entre ellos, el Estado de Chile, de adoptar medidas legislativas necesarias para procurar las adecuadas sanciones penales que hayan de aplicarse a las personas que cometen, o den orden de cometer, cualquiera de las infracciones graves definidas en el Convenio, como también se obligan a buscar a tales personas y hacerlas comparecer ante sus propios Tribunales, quedando vedadas las medidas tendientes a amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o favorecer la impunidad de sus autores.

DÉCIMO QUINTO: Que de esta manera, estándole prohibido a los estados partes, por la normativa internacional aplicable en la especie, dictar normas que tiendan a obtener la impunidad de los autores de violaciones a los derechos humanos, resulta inaplicable el artículo primero del decreto Ley N° 2.191 de 1978, como así lo ha declarado uniformemente la Excma. Corte Suprema, motivo por el cual se desechará la alegación formulada por este defensor.

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE FONDO DE PRESCRIPCIÓN:

DÉCIMO SEXTO: Que a fojas 1.942 el abogado Juan Carlos Manns Giglio, en representación de los acusados Sergio Leonardo Méndez Henríquez, Nelson Nicks Ávalos Rauld, Hernán Gilberto Salinas Solari y Ricardo Gilberto Gómez Centella, alegó como excepción de fondo la prescripción de la acción penal y de la pena, conforme a los artículos 93, 94 y 95 del Código Penal, considerando que desde el 7 de octubre de 1973 y octubre de 2011, año de la persecución penal de este caso, han transcurrido más de 38 años y con ello se ha cumplido el plazo de prescripción de la acción penal, y las penas de crimen prescriben en 15 años.

A fojas 1.956 la abogada Katherine Gnecco Sandoval, en representación del acusado Osvaldo Carmona Otero; y a fojas 2.000 el abogado Hernán Benavides Navarro, en representación del acusado Luciano Astete Almendras, alegaron como excepción de fondo la prescripción de la acción penal, conforme a lo dispuesto en los artículos 433 Nº 7 y 434 del Código de Procedimiento Penal,

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, por las razones que se dieron en los motivos tercero a octavo de esta sentencia, los que se dan por enteramente reproducidos, se desestimaré la excepción de prescripción de la acción penal opuesta.

En relación a la prescripción de la pena, se desestimaré por improcedente, atendido a que recién en lo resolutivo se pronunciará el tribunal sobre la imposición de una pena, en conclusión, no ha comenzado a correr plazo alguno que computar en este proceso.

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE FONDO DE AMNISTÍA:

DÉCIMO OCTAVO: Que a fojas 2.000 el abogado el abogado Hernán Benavides Navarro, en representación del acusado Luciano Astete Almendras, fundado en las motivaciones ya indicadas en el motivo noveno de esta sentencia opuso como excepción de fondo la amnistía del delito.

DECIMO NOVENO: Que por las razones señaladas en los motivos duodécimo a décimo quinto precedentes, se desestimaré la excepción de amnistía, opuesta ahora como excepción de fondo.

EN CUANTO AL FONDO:

VIGÉSIMO: Que, según consta a fojas 1.898, el Tribunal acusó a Luciano Astete Almendras, Osvaldo Carmona Otero, Sergio Leonardo Méndez Henríquez, Nelson Nicks Ávalos Rauld, Hernán Gilberto Salinas Solari y Ricardo Gilberto

Gómez Centella, como autores del delito de homicidio calificado, cometido en contra de Vino Valdés Morales y René Paredes Cortínez, el 7 de octubre de 1973 en la ciudad de Tocopilla, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancias primera y cuarta del Código Penal. Los hechos en que se fundó la acusación son los siguientes:

a. Que, las víctimas Vino Fidel Valdés Morales y René Paredes Cortínez fueron detenidas el día 06 de octubre de 1973 por personal de la Inspectoría de Tocopilla, siendo trasladadas al cuartel policial, ubicado en la intersección de las calles Arturo Prat y Sargento Aldea de la ciudad de Tocopilla.

b. Que, las víctimas de autos permanecieron al interior de la Inspectoría de Tocopilla hasta el día 7 de octubre de 1973 y durante la noche de ese día, los funcionarios de dicha Inspectoría les dieron muerte con múltiples heridas a bala, más de 30 cada uno.

c. Que, posteriormente, fueron llevados al Hospital de Tocopilla, indicando algunos hechores que se vieron obligados a disparar ya que las víctimas habían pretendido darse a la fuga infraccionando las disposiciones al toque de queda. En dicho lugar, el médico Horacio Castillo Hidalgo certificó la muerte de las víctimas, detallando que la causa de muerte de René Paredes Cortínez fue *"Inundación pleuro-pulmonar múltiples heridas penetrantes a bala"*, mientras que la causa de muerte de Vino Valdés Morales fue *"Ruptura cardiaca, heridas múltiples a bala"*.

Que, por su parte, la abogada querellante Adriana Rojas Pérez, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, a fojas 1.905, dedujo su acusación particular en el sentido que se considere la concurrencia de las agravantes establecidas en los

numerales 8, 10 y 11 del artículo 12 del Código Penal, estas son, prevalecerse del carácter público que tenga el culpable; ejecutar el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia; y ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad, respectivamente. Por lo anterior, solicita se imponga a los acusados las penas de presidio perpetuo, más accesorias legales y costas.

A fojas 1.913 el abogado querellante Álvaro Aburto Guerrero, en representación del Programa de Derechos Humanos, dedujo acusación particular en relación a la concurrencia de circunstancias agravantes previstas en los numerales 8 y 12 del artículo 12 del Código Penal, las que consisten en prevalecerse del carácter público que tenga el culpable; y ejecutarlo de noche o en despoblado, respectivamente, solicitando asimismo la aplicación de la regla de reiteración de delitos prevista en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Pidió que se les impusieran las penas de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales y costas.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que a fojas 1.942 el abogado Juan Carlos Manns Giglio, en representación de los acusados Sergio Leonardo Méndez Henríquez, Nelson Nicks Ávalos Rauld, Hernán Gilberto Salinas Solari y Ricardo Gilberto Gómez Centella, contestó la acusación fiscal y las acusaciones particulares. Solicitó la absolución de sus representados porque, en su concepto, no concurren los elementos necesarios para dar por establecida su participación. Preciso que no consta que las víctimas efectivamente hayan permanecido detenidas al interior del cuartel policial, lo que pudo ocurrir o no; agregando que en Tocopilla quienes efectuaban rondas y patrullajes, por

el estado de excepción constitucional, eran funcionarios de Carabineros, Ejército y la Marina, limitándose la Policía de Investigaciones a realizar pesquisas sobre delitos comunes y sus rondas, en ese aspecto, lo eran en base a ese objetivo. Señaló que, según se desprende de los antecedentes de esta causa y de la causa Rol N° 2182-98 "Tocopilla", que instruyó el Ministro en Visita Sr. Mario Carroza Espinosa, Fuentes Berrocal se entendía directamente con Carabineros, sin ocupar al personal policial bajo su mando en los operativos que involucraron transgresiones probables a los derechos humanos, por lo que éstos no tenían conocimiento alguno sobre esos hechos. En ese sentido, dijo que no resulta lógico atribuir a sus defendidos la autoría de los disparos que recibieron las víctimas, puesto que no se entiende que les disparen e inmediatamente los trasladen al Hospital, menos cuando ellos no tenían tutela alguna con el orden excepcional existente, que radicaba en el Jefe de Plaza Luciano Astete y el Fiscal Militar Juan de Dios Salazar, además de las Fuerzas de la Marina y Ejército que patrullaban Tocopilla; a lo que se suman las declaraciones de testigos de la causa que darían cuenta que, en la fecha en que se encontraron los heridos, no se escucharon disparos ni en el cuartel policial, ni en el borde costero de la ciudad; y la inexistencia de pericias que permitan determinar si las víctimas llegaron heridas o muertas al Hospital. De este modo, la participación de sus representados no estaría acreditada, siendo insuficiente para condenar una presunción o mera sospecha, debiendo entonces ser absueltos. Del mismo modo, se opuso a las agravantes de responsabilidad penal esgrimidas por los querellantes en sus acusaciones particulares, fundadas en el artículo 12 del Código Penal, toda vez que los antecedentes calificadorios se encontrarían dentro del artículo 391 N° 1

del mismo Código. En subsidio, invocó la atenuante de responsabilidad del artículo 11 N° 6 del Código Penal, por carecer sus defendidos de antecedentes pretéritos reprochables; y solicitó se les aplique lo previsto en el artículo 103 del Código Penal, por haberse cumplido más de la mitad del plazo para la prescripción del delito. Así, debiendo aplicarse dos o más atenuantes calificadas y ninguna agravante, y conforme además a lo previsto en el inciso tercero del artículo 68 del Código Penal, deberá rebajarse la pena impuesta en uno, dos o tres grados, quedando en la de tres años y un día, y concederse los beneficios de la Ley 18.216, cumpliendo la pena alternativa de libertad vigilada.

A fojas 1.956 la abogada Katherine Gnecco Sandoval, en representación del acusado Osvaldo Carmona Otero, contestó la acusación fiscal y acusaciones particulares, indicando que la acusación del Tribunal no señala, del modo establecido en el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal, cuál habría sido la conducta precisa o la participación que le cabría a su representado en los hechos, ni tampoco expresa los antecedentes probatorios que servirían para acreditar el hecho y la participación que se le imputa, pues aquellos que se mencionan como elementos de cargo, en realidad no serían tales. Agregó que del proceso consta que las víctimas fueron detenidas por efectivos militares de la época y no por personal de la Inspectoría; y que las declaraciones de los acusados son contestes en señalar la dinámica del procedimiento que se llevó a cabo en el borde costero de la ciudad, sin que ninguno de ellos se atribuya responsabilidad en los mismos, la que no corresponde presumir. Arguyó que, si las personas que se encontraron hubiesen estado muertas, los acusados tendrían que haber cercado el sitio del suceso e investigado el hecho y no llevarlas al Hospital; que no se explica la

finalidad de trasladarlas a ese lugar luego de asesinarlas, por lo que la concurrencia al Hospital sólo se entiende porque las víctimas estaban heridas. También refirió que el jefe de la unidad policial, José Fuentes Berrocal, mantenía relaciones directas con Carabineros y Militares que se encontraban en la ciudad en aquella época, sin que sus subordinados policiales intervinieran en alguna decisión sobre detenciones o en hechos de muerte, lo que se vería corroborado por antecedentes de esta causa y de la causa Rol N° 2182-98 "Tocopilla" del Ministro en Visita Sr. Mario Carroza, hechos que igualmente acaecieron en octubre de 1973, y por los que su representado fue absuelto. Añadió que Fuentes Berrocal formuló declaraciones en el proceso que fueron cambiando con el tiempo, perdiendo así toda credibilidad. Así, la participación de su defendido sólo se ha tenido por establecida a través de suposiciones que no logran superar el estándar exigido por el legislador para condenar, por lo que deberá ser absuelto. En subsidio, pidió que se recalifique su participación a la de encubridor o cómplice, al no poder encuadrarse su actuar dentro de las hipótesis de autoría del artículo 15 del Código Penal. En ese sentido, explicó que el acusado sólo ha reconocido haber sido funcionario de la Policía de Investigaciones de Tocopilla a la época, sin que exista otro antecedente controvertido, serio y suficiente que dé cuenta que estuvo presente en el lugar o al momento en que se dio muerte a las víctimas, o bien, que hubiera cooperado concertado para dicha acción, o que hubiera disparado a los detenidos, lo que indica la imposibilidad de una participación en calidad de autor directo o mediato. Y, para el evento de dictarse sentencia condenatoria, invocó las circunstancias atenuantes de los numerales 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal, estas son: su irreprochable conducta anterior, que consta de antecedentes sociales y

profesionales, así como de su extracto de filiación; y la colaboración sustancial, que se verifica con la voluntad que prestó siempre su representado en el esclarecimiento de los hechos, aportando, en todas y cada una de las ocasiones que fue requerido, antecedentes relevantes, colaborando con informes en razón a sus conocimientos en criminalística y su calidad de Ex Jefe Nacional de Homicidios. Pidió también que se le aplique lo prescrito en el artículo 103 del Código Penal, norma de orden público y de carácter imperativo que debe ser observada por el juzgador conforme al principio de legalidad, por haber transcurrido más de la mitad del tiempo de prescripción de los delitos investigados. Por último, solicitó se le otorgue alguno de los beneficios contemplados en la Ley 18.216.

A fojas 2.000 el abogado Hernán Benavides Navarro, en representación del acusado Luciano Astete Almendras, contestó la acusación fiscal y acusaciones particulares, solicitando la absolución de su defendido por falta de participación. Argumentó que se determinó en la causa quiénes detuvieron, interrogaron, trasladaron y dieron muerte a las víctimas, alegando un supuesto intento de fuga, y que en ninguna de esas situaciones participó, directa o indirectamente, su defendido, siendo el único antecedente en su contra el hecho de haber dispuesto la vigencia de un toque de queda, en razón del cargo que ostentaba. Dijo que su representado nunca ordenó dar muerte a esas personas, que no tuvo contacto alguno con ellas y que sólo se enteró de sus muertes por información posterior recibida del Jefe de la Unidad de la Policía de Investigaciones de Tocopilla. Por otro lado, manifestó que los acusados fueron contestes al señalar que recibían instrucciones del Fiscal de Carabineros de la época, quien tenía dependencia directa del Primer Juzgado Militar de Antofagasta, y no de su defendido. Esgrimió que, en

consecuencia, no existen presunciones fundadas para condenarlo con plena convicción, como autor, cómplice o encubridor de homicidio calificado. En subsidio solicitó que, en caso de dictarse sentencia condenatoria, se apliquen las eximentes de responsabilidad penal de los numerales 9 y 10 del artículo 10 del Código Penal. En subsidio, se consideren ambas como circunstancias atenuantes de responsabilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 N° 1 del mismo texto legal. Ello, puesto que se vio obligado al cumplimiento de un deber dispuesto por la Jefatura de la época, sin alternativa alguna; y por haber obrado violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un medio insuperable. Finalmente, requirió que se le aplique la minorante de responsabilidad del artículo 11 N° 6 del Código Penal, dada su irreprochable conducta anterior, y que ésta se considere como muy calificada, pidiendo también se aplique la media prescripción del artículo 103 del Código punitivo, por haber transcurrido en exceso el plazo señalado en la norma, y se le conceda algunos de los beneficios de la Ley 18.216, eximiendo a su representado del pago de multas y costas de la causa.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que el delito de homicidio calificado previsto en el artículo 391 N° 1 circunstancias primera y cuarta del Código Penal, sanciona con la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo al que mate a otro ejecutando el homicidio, entre otras calificantes, con alevosía o actuando sobre seguro, y/o con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor al ofendido.

VIGÉSIMO TERCERO: Que para determinar los hechos del libelo acusatorio se rindieron pruebas instrumentales,

periciales, testimoniales e inspección personal del Tribunal que rolan en autos.

EN RELACIÓN A LA EXISTENCIA Y FECHA DE MUERTE DE LAS VÍCTIMAS:

VIGÉSIMO CUARTO: Que, respecto de René Paredes Cortínez, el certificado de nacimiento agregado a fojas 608 comprueba que éste nació en la ciudad de Antofagasta el 15 de febrero de 1952, la inscripción lleva el número 309 en el Registro de Nacimientos del año 1952 y sus padres eran René Estanislao Paredes Céspedes y Esperanza Fortunata Cortínez, información que es corroborada por los antecedentes familiares de la víctima remitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación a fojas 142 y 146. Los certificados de defunción agregados a fojas 43, 55, 93, 342 y 1415, dan cuenta que falleció a las 22:50 horas del 7 de octubre de 1973 en la ciudad de Tocopilla. De la conjunción de ambos documentos surge que la víctima tenía 21 años al momento de su muerte.

Respecto a la víctima Vino Fidel Valdés Morales, consta del Informe Policial agregado a fojas 11 y siguientes, en el cual la Policía de Investigaciones consulta el Sistema Biométrico del Servicio de Registro Civil e Identificación, que la víctima nació el 23 de marzo de 1949 en la ciudad de Iquique, que la inscripción lleva el número 429, sin indicar registro, y que sus padres eran Luis Segundo Valdés y Julia del Carmen Morales Espejo. Asimismo, consta a fojas 148 red familiar de la víctima, remitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que indica que su RUN es el N° 5.658.459-5, y reitera la fecha, lugar y número de inscripción obtenidas mediante el Sistema Biométrico. Como fecha de defunción, se señala el 7 de octubre del año 1973, que fue inscrita bajo el número 198 del año 1973 en la circunscripción de

Tocopilla. Los certificados de defunción agregados a fojas 22, 36, 70, 100 y 343, en tanto, dan cuenta que falleció a las 22:50 horas del 7 de octubre de 1973 en la ciudad de Tocopilla. Del análisis de estos documentos surge que la víctima tenía 24 años al momento de su muerte.

**EN RELACION A LA DETENCIÓN DE LAS VICTIMAS POR LA
POLICIA DE INVESTIGACIONES CON ANTELACIÓN A LA MUERTE:**

VIGÉSIMO QUINTO: Que para acreditar este hecho el tribunal tomó en consideración las declaraciones de doña Alicia Isabel Villarroel Gálvez, quien denunció ante el Juzgado del Crimen de Tocopilla la presunta desgracia de su conviviente René Paredes Cortínez dando origen a los autos Rol N°241/73 que se han tenido a la vista en esta causa.

Al denunciar la desaparición el día 8 de octubre de 1973, señaló que su conviviente a la sazón de 21 años de edad, de oficio comerciante, fue detenido el sábado 6 de octubre de ese mes, por el Servicio de Investigaciones, por infringir el toque de queda, después de las 20 horas. Añadió que esto lo supo el día siguiente, en el mismo Cuartel de ese servicio, al hacer las averiguaciones sobre su paradero, apenas terminó el toque de queda. Señaló que: "Por la tarde del día de ayer, le llevé onces y me dijeron que tenían que hacer averiguaciones en todo Chile. Y hoy en la mañana, cuando fui nuevamente a averiguar al Cuartel, me dijeron que lo habían puesto en libertad a las 19 horas del día domingo. Esto último me parece raro, pues el domingo estuve en una esquina en la misma cuadra en que se encuentra el Cuartel, hasta las 19,30 horas, y no lo vi salir". Enseguida manifestó que antes de ir al tribunal hizo averiguaciones en la Comisaría de Carabineros, temía que le pudiera haber ocurrido algo, porque andaba con lo puesto, sin carnet de identidad, ya que todos los documentos los tenía en la casa, así como su ropa. Añadió

que él jamás llegaba tarde, no tenía amigos, no fumaba ni bebía, por lo que no encontraba motivo alguno para suponer que voluntariamente se haya quedado afuera. Luego lo describió junto a sus vestimentas, señalando por último su fecha de nacimiento el 15 de febrero de 1952 y el nombre de su padre.

VIGÉSIMO SEXTO: Que en el indicado expediente consta que el juez titular don Julio Vicencio Becerra el mismo día ordenó que se pidiera información vía telefónica a Carabineros, Investigaciones y a la Cárcel Pública de la localidad, en orden a si pudiera encontrarse en alguno de esos establecimientos la persona desaparecida, certificándose en autos. Igualmente a fojas 2 la secretaria subrogante del Tribunal doña Clarisa Madrid a las 12,30 horas del 8 de octubre de 1973, dando cumplimiento a lo ordenado por el juez, se comunicó telefónicamente con la Comisaría de Carabineros donde el sub oficial de guardia le informó que la persona desaparecida no se encuentra detenida, no figurando tampoco en la lista de prisioneros de la Fiscalía Militar y el funcionario Gómez de la Inspectoría de Investigaciones señaló que Paredes fue dejado en libertad en la tarde del día domingo 7 de octubre ("mes en curso"); y el gendarme señor Argandoña expuso que tal persona no había ingresado a la Cárcel Pública.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, interrogado específicamente el acusado Ricardo Gilberto Gómez Centellas a fojas 714 acerca del certificado, indicó que no recordaba haber dado esa información, agregando que si aparece certificada en la causa de un tribunal debe haber sido así, "es posible que haya estado de guardia y haya dado esa información", pero no lo recordaba.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, si bien es cierto no existe una clara y univoca versión, de doña Alicia Villarroel Gálvez

respecto al momento y lugar en que fue detenido su conviviente René Paredes Cortines y su amigo Vino Fidel Valdés Morales, pues en alguna oportunidad señaló que había sido detenido en el su domicilio y en otra ocasión donde había ido a jugar pool, o como señaló al hacer la denuncia de presunta desgracia el día 8 de octubre de 1973, esto es, al día siguiente a aquel en que le dieron muerte, que había sido detenido por infringir el toque de queda, todo ello es lógico y por eso entendible, y se debe a los antecedentes que ella pudo recabar después de saber lo que había sucedido con su pareja y su amigo; sin embargo, ello no debilita para nada sus dichos respecto que al no verlo llegar en la noche del 6 de octubre y madrugada del día siguiente, se levantó a buscarlo en el hospital, en la Comisaría de Carabineros y en el Cuartel de Investigaciones donde finalmente lo halló, donde no obstante no lo pudo ver o hablar con él, si le informaron que allí se encontraba y le sugirieron que le llevara alimento y abrigo, lo que hizo. Además, al ser informada en ese lugar que podía ser dejado en libertad lo esperó el domingo 7 de octubre hasta las 19,30 horas y no más porque a las 20 horas comenzaba el toque de queda y la podían detener.

Cabe señalar que esta declaración la efectuó en la mañana del día lunes 8 de octubre de 1973, después de ir a buscarlo al Cuartel de Investigaciones donde le dijeron que había sido puesto en libertad, y después de averiguar en la Comisaría de Carabineros, y fue en la mañana de ese día porque después de tomarle esa declaración el tribunal proveyó la denuncia y le ordenó a la ministra de fe del Tribunal, esto es, a la Secretaria que consultara telefónicamente, entre otras instituciones a Investigaciones, donde le respondieron a las 12,30 horas que había estado detenido y que habría sido dejado en libertad en la tarde del día domingo 7 de octubre de 1973.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, el testimonio de Alicia Villarroel Gálvez siendo singular, se trata de un testigo presencial quien no obstante no haber visto personalmente a su pareja René Paredes Cortínez en el interior del Cuartel de Investigaciones, recibió información directa de personal de ese servicio respecto de que estaba detenido en ese lugar, sugiriéndole que le llevara comida y ropa, lo que ella hizo en horas de la tarde del día 7 de octubre de 1973. Además dio explicaciones de los motivos que tuvo para esperarlo solo hasta las 19,30 horas porque a las 20,00 horas comenzaba el toque de queda y temía que la detuvieran por infringir esa prohibición de circular en la vía pública, sin que hasta a esa hora haya sido dejado en libertad como le habían insinuado los funcionarios de la guardia. Al tratarse de un testimonio singular no reúne los requisitos exigidos por el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal, sin embargo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 464 del mismo código, constituye una presunción judicial que unida al hecho certificado en el proceso Rol 241/73 sobre presunta desgracia aludido, por medio del cual la Secretaria del Tribunal en cumplimiento de una resolución judicial dejó constancia que a través de un llamado telefónico el funcionario de apellido Gómez de la Inspectoría de Investigaciones le señaló que Paredes había sido dejado en libertad en la tarde del día domingo 7 de octubre de 1973, esto es, el día anterior; información que a la luz de los acontecimientos posteriores adoleció de veracidad, sin embargo, al dar cuenta que sí estuvo detenido en esa unidad policial, otorgó fidelidad a lo relatado por doña Alicia Villarroel. En suma el testimonio de la última constituye prueba completa del hecho consistente en haber sido detenido René Paredes Cortínez y su amigo Vino Fidel Valdés Morales, por Inspectoría de la Policía de Investigaciones de Tocopilla en la tarde del día

6 de Octubre de 1973 y que hasta las 19,30 horas del domingo 7 de octubre de ese mismo año, aun se encontraba bajo el poder de esa unidad policial, al reunir todos los requisitos contemplados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. En efecto se funda en hechos reales y probados, unida a la certificación aludida se ha convertido en múltiples y graves; es precisa, directa y concuerdan entre sí, ya que ambas conducen a la conclusión de haber existido el hecho de que dieron cuenta.

EN RELACIÓN A LA CAUSA DE LA MUERTE:

TRIGÉSIMO: Que en relación a la causa de muerte de René Paredes Cortínez, se señala en los certificados de defunción agregados a fojas 43, 55, 93, 342 y 1415, en certificado médico agregado a fojas 97, y en acta de inscripción de defunción de fojas 1354 y 1414, que ésta se produjo por "Inundación pleuro-pulmonar múltiples heridas penetrantes a bala". Respecto de Vino Fidel Valdés Morales, los certificados de defunción agregados a fojas 22, 36, 70, 100 y 343, certificados médicos de defunción agregados a fojas 71, 106 y 1419, y actas de inscripción de la defunción de fojas 23, 73, 104 y 1418, indican como causa de muerte "Ruptura cardíaca, heridas múltiples a bala".

El médico Horacio Alfonso Castillo Hidalgo fue el encargado de certificar la muerte de ambas víctimas, según se desprende de los certificados médicos de defunción y actas de inscripción de la defunción previamente individualizadas, quien depuso a fojas 114, 186 y 1293 de estos autos y reconoció la firma estampada en la documentación exhibida, manifestando recordar que un día, sin poder precisar fecha exacta, pero que pudo haber sido dentro de los meses de septiembre u octubre de 1973, encontrándose de turno en el Hospital Marcos Macuada de Tocopilla, lo llamaron a la sala de autopsia que estaba

ubicada en el patio interior para certificar la causa de muerte de dos personas de sexo masculino, jóvenes de entre 20 a 22 años de edad, cuyos cuerpos presentaban más de 30 impactos de bala cada uno, focalizados en la zona abdominal y torácica, por lo que no fue necesario realizar autopsia para determinar la causa de muerte. Dijo también que no había impactos de bala en el rostro y que la mayoría de los impactos eran de frente y de costado, de adelante hacia atrás, los cuerpos estaban a torso descubierto, sin recordar haber visto heridas de bala en la espalda, y que daba la impresión que todos los disparos eran de entrada y que todos los cuerpos no tenían sangre. Consultado, señaló que las perforaciones eran todas similares, de un centímetro aproximadamente, las que supuso fueron causadas por ametralladora. Preciso que la muerte había sucedido un par de horas o más, atrás, que no fue inmediato. Expreso no recordar cómo llegaron los cuerpos a la unidad, pero al parecer se le dijo que no habían respetado el toque de queda, sin recordar haber certificado la muerte de más personas por infracción al toque de queda en Tocopilla. Indico que recordaba haber certificado la defunción en horas de la tarde, pudo haber sido al mediodía de la una o dos de la tarde. De la simple observación de los certificados de defunción cuyas firmas reconoció el doctor Castillo, puede visualizarse que en cada uno de ellos, se señala que la fecha de defunción fue el siete de octubre de mil novecientos setenta y tres a las 22,50 horas, pero el certificado efectuado por el médico en el caso de René Paredes Cortínez tiene fecha 9 de octubre de 1973 y el de Vino Fidel Valdés Morales, el 10 de octubre de 1973. Las inscripciones de defunción en el Servicio de Registro Civil, de René Paredes Cortínez fue el 9 de octubre de 1973 a requerimiento de doña Alicia Isabel Villarroel Gálvez, y la de Vino Fidel Valdés Morales el 11 de octubre de 1973, a

requerimiento de doña Olga Wyss Gibert. Ambas debieron realizarse mediante inscripción judicial, obviamente porque la sepultación se realizó después de las 48 horas después del fallecimiento.

Se solicitó informe de autopsia respecto de ambas víctimas al Servicio Médico Legal, que evacuó oficios a fojas 35, 81 y 1330, comunicando no contar antecedentes al respecto. En igual sentido, a fojas 83, el Hospital de Tocopilla comunicó que no existen antecedentes respecto de la víctima René Paredes Cortinez. Respecto de esta información cabe señalar que el médico Horacio Castillo señaló que no recordaba haber practicado la autopsia como se indica en el certificado de defunción, señaló que certificó la muerte únicamente, y agregó que para constatar una perforación cardiaca no es necesario realizar una autopsia, y en el caso de René Paredes constató un estallido pleuropulmonar.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, sin perjuicio de la prueba testimonial y documental aludida, cabe hacer presente que, tal como consta del Oficio N° 7-TOC de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, acompañado a fojas 219, en causa Rol 2.182-98, el 28 de noviembre de 2001 se constituyó en el Cementerio Municipal de Tocopilla el Ministro de Fuero don Juan Guzmán Tapia a fin de exhumar los cuerpos de dos personas que figuraban como N.N. y que habían sido inhumadas en dicho lugar en 1973, levantándose el acta que se encuentra agregada a fojas 249 y siguientes de estos autos. En ésta, se señala que, conforme a la documentación existente, los cuerpos N.N. corresponderían a: "el primero, a un fallecido el 11 de octubre de 1973 llamado Vino Fidel Valdés Morales, que está sepultado en el nicho 2912, inscripción 198, de 24 años de edad, sexo masculino, causa de muerte ruptura craneana heridas de bala; y el segundo,

al fallecido el 9 de octubre de 1973, llamado René Paredes Cortinez y está sepultado en el nicho 2929, inscripción 196, 21 años de edad, sexo masculino, soltero, causa de muerte inundación pleuro pulmonar, múltiples heridas a bala", haciéndose presente además, que el cuerpo exhumado desde el nicho 2929, se encontraba vestido con ropa de mujer. A fojas 221, según da cuenta Oficio N° 194-2005 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, suscrito por el Ministro de Fuero don Joaquín Billard Acuña, en causa Rol N° 2.182-98 "Tocopilla" se ordenó la devolución de tales osamentas al cementerio, para ser depositadas en sus tumbas de origen, a requerimiento de la Administradora del Cementerio Municipal de Tocopilla, realizado mediante ORD. N° 12, acompañado a fojas 255 de estos autos, en que se indica que, en diciembre de 2002, se presentó un señor reclamando los restos de su hermana Juana Evangelista Herrera, fallecida el 22 de octubre de 1973, ya que encontró su nicho vacío.

A fojas 244, en tanto, se acompañó ORD. N° 524/2013, mediante el cual la Municipalidad de Tocopilla comunica a este Tribunal que los cuerpos exhumados y trasladados a Santiago por orden de Ministro Juan Guzmán Tapia, en el año 2001, corresponderían a Vino Fidel Valdés Moreno y René Paredes Cortinez, información que complementa a fojas 290, a través de ORD. N° 688/2013, señalando que, al 6 de diciembre de 2013, y sin perjuicio de lo comunicado por la Corte de Apelaciones de Santiago en su Oficio N° 194-2005, las osamentas no habían sido devueltas; que los dos nichos exhumados en realidad no tenían identificación y que la información otorgada en su momento al Ministro Sr. Guzmán, respecto a la identidad de tales osamentas, se obtuvo del libro de sepultaciones de la época, que podía contener errores en los nombres.

Paralelamente, a fojas 282, el Director Nacional del Servicio Médico Legal, a través de ORD. N° 21.100 informó que el 2 de septiembre de 2013 llegaron a dependencias del Servicio cinco cajas con restos óseos, provenientes de la Universidad de Chile, las cuales pertenecían a dos personas exhumadas en la ciudad de Tocopilla el 28 de noviembre de 2001, en causa ROL N° 2.182-98, seguida por el Ministro de Fiero don Juan Guzmán Tapia. A fojas 382 se agregó un certificado de defunción de Juana Evangelista Herrera, fallecida el 22 de septiembre de 1973 en la ciudad de Tocopilla por "Deshidratación aguda. Enterocolitis aguda". A fojas 581 y siguientes, el Servicio Médico Legal de Santiago, tras realizar las pericias pertinentes, concluye que uno de los cuerpos exhumados corresponde al de una mujer cuya edad se encontraría en un rango entre los 43 y 73 años, cuyos restos no registraron lesiones perimorten. En cuanto al otro cuerpo exhumado, identificado como los restos de una persona de sexo masculino, las pericias practicadas por el Servicio Médico Legal a fojas 731 y siguientes, dan cuenta que no correspondería a ninguna de las víctimas de la causa.

Que, ante la divergencia de los antecedentes extraídos de la exhumación practicada en la causa ROL N° 2.182-98 Episodio "Tocopilla", lo informado por la Municipalidad de Tocopilla, y el resultado de las pericias practicadas por el Servicio Médico Legal, el Tribunal decretó la realización de una Inspección Personal en dependencias del Cementerio Municipal de Tocopilla, la que se llevó a efecto el 20 de junio de 2014, según da cuenta el acta de fojas 438, pudiendo constatarse que, en el documento denominado "Libro de Sepultación Periodo 1970-1984", específicamente en las páginas 50 y 51 de éste, figuraba registrada la víctima René Paredes Cortínez, el 9 de octubre de 1973, bajo el ingreso N° 11, señalándose, además, los siguientes

antecedentes: "inscripción de defunción N° 196, 21 años de edad, sexo masculino, soltero, nacido en la ciudad de Antofagasta, sepultado a la izquierda en el nicho N° 2920 de la cuarta fila, con causa de muerte "inundación pleuro pulmonar múltiples herida bala", y existiendo la siguiente nota "extracción 28.11.2001 orden Ministro 10.50 hora". En las mismas páginas, el 11 de octubre de 1973, se registra el ingreso N° 13, correspondiente a la víctima Vino Fidel Valdés Morales, inscripción de defunción N° 198, 24 años, sexo masculino, sepultado a la derecha en el nicho N° 2912 de la cuarta fila, con causa de muerte "ruptura craneana herida a bala", existiendo la siguiente nota "extracción 28.11.2001 orden Ministro 11.20 horas". En la página 51, además, se encuentra adjunta una hoja de oficio manuscrito, que rola fojas 262 de la presente causa. En las páginas 48 y 49 del mismo libro, el 22 de septiembre de 1973 y bajo el ingreso N° 20, figura la sepultación en el nicho N° 2920 de la cuarta fila, de doña Juana Evangelina Herrera, inscripción defunción N° 213, 89 años de edad, viuda, oriunda de Vallenar, con causa muerte "Deshidratación aguda", existiendo la siguiente observación: "Traslado por orden Ministro Justicia error, por no tener identificación en el nicho". En la diligencia se deja constancia, además, que la Administradora del Cementerio exhibió al Tribunal un cuaderno sin tapas, en regular estado de conservación y con evidencia de haberse quemado en el extremo inferior derecho, leyéndose en la segunda hoja de éste lo siguiente: "OCTUBRE 1973", figurando en cuarto lugar el nombre René Paredes Cortínez, el 9 de octubre de 1973, TEMPORAL, CEM N° 2, 21 años, y en el quinto lugar Vino Fidel Valdés M., el 11 de octubre de 1973, 24 FOSA COMUN, 24 años. A fojas 474 se agregó a los autos informe pericial fotográfico N° 171, correspondiente a la diligencia de Inspección del Tribunal aludida, junto a un CD que consta de 78 fotografías,

incluyéndose las del Libro de Sepultaciones al que hace referencia el acta de diligencia, y de los nichos 2920 y 2912, desocupados. A fojas 477 se agregó informe pericial planimétrico N°125/2014 de la diligencia en comento.

Además de la Inspección del Tribunal en el Cementerio Municipal de Tocopilla, su Administradora doña Isabel Victoria Cortés Marín, a fojas 748 refirió desempeñarse en dicho cargo desde el año 1990 y señaló que en el cementerio existen dos libros con constancias de sepultaciones: 1) El primero es un cuaderno que se logró rescatar desde un incendio, en el que figuran las dos víctimas de este proceso. Respecto a Vino Fidel Valdés, el registro indica que fue dejado en una fosa común, lugar al que debió haberse ido en cajón, y según le indicó el dueño de una funeraria, ya fallecido, los cuerpos muertos por balas, en ese entonces, eran depositados en los cajones sin ropa. Esta testigo presume que el cuerpo de Vino Valdés se encuentra actualmente en la fosa, ignorando si tiene alguna identificación. En cuanto a René Paredes Cortinez, expresó que en el cuaderno señalado aparece con el rezo "temporal cem. N° 2", lo que significa que fue sepultado en tierra y, posteriormente, con el paso de los años, debió ser trasladado a la fosa común, probablemente depositado en sacos rotulados, por el deterioro de los ataúdes. 2) En cuanto al segundo libro, explicó que éste es una transcripción del primero y quienes lo hicieron cometieron errores, en las fechas, en el número de nichos, en los nombres, apellidos y otros detalles. Ello, porque el primer libro es de la época en que fallecieron las víctimas a diferencia del segundo. Por estas razones, concluye que los cuerpos de las víctimas jamás estuvieron en nichos y al constituirse el Ministro Guzmán en el cementerio, el Administrador Subrogante Osvaldo Vega Fritz, actualmente fallecido, obtuvo los antecedentes del segundo libro, lo

que habría causado la confusión, porque estima que los cuerpos de las víctimas de la causa se encuentran actualmente en la fosa común.

A fojas 1221 se acompañó Informe de Terreno del Servicio Médico Legal de Santiago, que da cuenta de las diligencias de reconocimiento y verificación in situ de la fosa común en el Cementerio Municipal de Tocopilla, con el fin de determinar la factibilidad técnica de poder exhumar su contenido, y recuperar de entre éste, los restos de las víctimas. El informe concluye que "no se encontraron registros que den cuenta del uso de la fosa en los años de interés para esta causa. Debido a esto, y a las características de la fosa misma, no se pudo descartar o confirmar durante la inspección en el sitio, que los cuerpos de las víctimas Vino Valdés Morales y René Paredes Cortines, se encuentren en el lugar". Además, evaluaron que la exhumación de la fosa común era factible, pero que ésta conllevaría un proceso largo y delicado, y cuya realización dependía de otros varios requerimientos técnicos.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que a fojas 341 se acompañó copia simple de la declaración prestada por Alicia Isabel Villarroel Gálvez ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el 28 de julio de 1990, quien relató haber sido conviviente de la víctima René Paredes Cortínez a la época de ocurrencia de los hechos y, en lo pertinente, refirió que, al día siguiente de enterarse de la de detención de éste y de su amigo Fidel, unas vecinas le informaron que por la radio habían dicho que los habían fusilado, junto a otros detenidos que trataron de escaparse. Por ello, se dirigió a la morgue, entrando por sus propios medios, viéndolos en el suelo, con un paño que les vendaba el estómago y con sangre. Agregó que allí había, por lo menos, otros cuatro cadáveres más en el

suelo. Respecto a Vino Fidel, expresó que como nadie lo reclamó, lo sepultaron en una fosa común. A fojas 484, en declaración policial prestada en autos, corrigió sus dichos expresando que fue ella quien escuchó un comunicado radial donde se indicaba que René Paredes y su amigo Fidel habían fallecido producto de disparos perpetrados al no acatar la voz de "alto" en la playa, y que concurrió en días posteriores al Hospital de Tocopilla, donde vio sobre el suelo a René, quien vestía un pantalón negro, zapatos negros, sin calcetines y una camisa roja con blanco, sus puños estaban muy apretados, al igual que sus piernas, muy rígido, con sus piernas y brazos juntos y en la región abdominal tenía vendas ensangrentadas desde las tetillas hacia abajo; expuso también que sus vecinos la recibieron e hicieron una colecta para comprar una urna y hacer los trámites en el Cementerio de Tocopilla, que ella estaba sola y que no tenía familiares ni conocidos en la ciudad, y como no pudo hacerse cargo de los costos del entierro de Fidel, no supo cómo lo trasladaron al cementerio, y los funcionarios de ese lugar le dijeron que lo habían mandado a una fosa común. A fojas 770 judicialmente precisó que el cuerpo de René Paredes iba en un cajón común y corriente, sin pulir ni barnizar, no llevaba nombre; añadió que cuando ella llegó al cementerio había un hoyo en la tierra y el sepulturero tapó la caja con arena, dejó un montículo para que se notara que había algo enterrado y, a continuación, hizo una cruz bien rústica con su nombre. Ella tomó unos bolones que había cerca y los puso alrededor del montículo que quedó. Expresó que fue la única asistente cuando lo sepultaron, que no se hizo en nicho, solamente cavaron un hoyo y dejaron el cajón, lo taparon con tierra, y hasta diciembre de 1973, fecha en que ella permaneció en Tocopilla, nunca fue trasladado a otro lugar. Agregó que no hizo ningún trámite para sepultarlo, sólo fue a reconocer

su cuerpo y después le avisaron que él ya estaba en el cementerio y que fuera para allá, pero no recuerda los nombres de las personas que le dieron aviso. A fojas 1410, precisó que las vendas no tenían tanta sangre, que eran vendas limpias. Y que no vio el cuerpo de Fidel, sino que vio un bulto o cuerpo tapado y supuso que era él.

EN CUANTO AL LUGAR EN QUE SE HABRÍAN EJECUTADO LOS HOMICIDIOS:

TRIGÉSIMO TERCERO: Que a fojas 30, 31, 58, 59, 75 y 76 se incorporaron a la causa recortes de prensa de un periódico de la época, remitidos por el Arzobispado de la Vicaría de la Solidaridad, que informan en una noticia titulada "Dos muertos por no respetar toque de queda en Tocopilla", donde se indica que esa noticia está consignada en un comunicado emitido la tarde del lunes (debe corresponder al 8 de octubre de 1973) por el Prefecto de Carabineros, Teniente Coronel y Delegado Jefe de Zona en Estado de Sitio, Luciano Astete Almendras, en que se expresa: "Se pone en conocimiento de la ciudadanía, que anoche, alrededor de las 22,30 horas en circunstancias que personal de la Inspectoría Local de Investigaciones efectuaba rondas de poblaciones, al pasar por el sector de la ex Planta Kazazian, sorprendió a tres individuos en actitudes sospechosas a quienes se les ordenó detenerse, no obedeciendo este requerimiento, dándose a la fuga por el camino que bordea el mar hacia el norte, motivo por el cual el personal de investigaciones disparó en su contra". "A consecuencia de lo anterior, fueron dados de baja dos de estos individuos, que no han sido identificados, logrando el tercero huir por los roqueríos en dirección a las instalaciones de la Pesquera Guanay, siendo imposible su detención debido a la oscuridad reinante en el sector". "Los infractores al toque de queda fueron trasladados a la

morgue del Hospital local para su autopsia médico legal". Esa información comenzaba señalando que "Personal de Investigaciones de Tocopilla dio de baja a dos individuos la noche del domingo, al ser sorprendidos en actitudes sospechosas después de la hora inicial de toque de queda (...)". Más adelante en la misma publicación se señala: "se aclara el comunicado de esta fecha, sobre infractores al toque de queda dados de baja por personal de Investigaciones, anoche a las 22:30 horas, de la Ex Planta Kazazian, en el sentido que fueron identificados y se trata de los delincuentes habituales VINO FIDEL VALDÉS MORALES, alias "El Fidel" o "El Chino", 24 años, soltero, sin oficio ni domicilio conocidos; y RENÉ PAREDES CORTINEZ, alias "El flaco Cortínez", 21 años, soltero, también sin oficio ni domicilio conocido". Sobre la copia de publicación se lee una leyenda manuscrita que reza: "Mercurio. Calama. 11/10". A fojas 288, se acompañó acta de Inspección del Tribunal a las oficinas del periódico "El Mercurio" de Antofagasta, ubicado en calle Matta 2112, constatándose, desde los archivos de ejemplares del mes de octubre de 1973, que los recortes de prensa agregados al proceso corresponden a la edición del día 11 de octubre de 1973, página 10.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que a fojas 545 se trajo a la vista la causa Rol N° 241-73, seguida ante el Juzgado de Letras Tocopilla por presunta desgracia, causa iniciada el 8 de octubre de 1973 tras denuncia realizada por Alicia Isabel Villarroel Gálvez por la detención de su conviviente, René Paredes Cortinez. A fojas 4 de la referida causa, consta Oficio N° 1387, de 19 de octubre de 1973, remitido por la Comisaría de Carabineros de Tocopilla al Tribunal, dando cuenta que la víctima fue muerta por no respetar el toque de queda y tratar de huir de la patrulla que lo interceptó el 7 de octubre de ese mismo año, a las 22:30 horas, hecho que fue puesto en conocimiento de la ciudadanía mediante

comunicado de 8 de octubre de 1973, del Sr. Delegado del Jefe de Zona en Estado de Sitio, Tte. Coronel Luciano Astete Almendras. Concluye el referido oficio, señalando que la víctima fue sepultada el 12 de octubre de 1973 por su conviviente Alicia Isabel Villarroel Gálvez. A fojas 5 se agregó certificado de defunción de René Paredes Cortínez. A fojas 8 se acompañó Parte N° 551 de la Inspectoría de Tocopilla, en que se señala haber entrevistado a la denunciante, quien refirió que el 8 de octubre el Mayor de Carabineros le comunicó que su conviviente estaba muerto, razón por la que fue a la morgue del Hospital, donde reconoció su cuerpo y supo que su muerte se debió a que no había respetado órdenes de la Policía después del toque de queda. Añadió que posteriormente hizo las gestiones para su sepultación, la que efectuó con la ayuda de sus vecinos el 12 de octubre de ese año. El mismo informe policial comunica que el 7 de octubre, alrededor de las 22:30 horas, personal de la Policía de Investigaciones efectuaba ronda de población, cuando sorprendieron a tres individuos en el sector costero norte, cerca de la Planta Kazazian, que no respetaron la voz de "alto", dándose a la fuga, obligando al uso de armas de fuego, siendo dos de éstos dados de baja y trasladados a la morgue, resultando uno de los muertos ser René Paredes Cortínez, cuya causa de muerte, según informe de autopsia evacuado por el Doctor Horacio Castillo el 9 de octubre de 1973, fue "inundación pleuro pulmonar. Múltiples heridas penetrantes a bala".

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, de los antecedentes referidos en este acápite surgió la información transmitida en la época en el comunicado oficial y en el parte aludido, que por ello, fue emanada exclusivamente de quienes ahora se encuentran acusados como autores de los dos delitos de homicidio calificado. En efecto, fueron ellos quienes,

coordinados o no con la principal autoridad en el estado de sitio que como en todo el país, regía también por esos días en la ciudad de Tocopilla, quienes levantaron la versión de haber sorprendido a tres personas infringiendo el toque de queda en el sector costero, próximo a una antigua pesquera de la zona, y que una de esas personas se habría logrado dar a la fuga y la patrulla policial dio de baja a los otros dos. Esta versión, feble desde el punto de vista que se le mire, puesto que aun considerando que es verdad que se trataba de sujetos que pretendieron darse a la fuga al ser sorprendidos infringiendo el toque de queda, no resiste a la lógica que todas las heridas provocadas por las balas estuvieran ubicadas en el pecho y en el abdomen y no en la espalda como debieron estar si es que les dispararon cuando se daban a la fuga, salvo que las víctimas tuvieran la virtud de correr hacia atrás; sino porque, además, esos dichos fueron absolutamente controvertidos, al menos parcialmente, por un testigo que logró pesquisar este tribunal en el desarrollo de una diligencia de inspección personal (fojas 1.313 y ss.) efectuada tanto al edificio que ocupaba en la época la Inspectoría de la Policía de Investigaciones, al inmueble donde funcionaba el pool donde supuestamente habrían detenido a las víctimas el día sábado 6 de octubre de 1973, y al sector costero antes aludido; es así que, y teniendo en consideración, el hecho cierto certificado cuando ocurrieron los hechos, plasmado en el instrumento público consistente en el certificado de defunción, que además fue reconocido por el médico Horacio Castillo quien lo suscribió, donde se describe que la causa originaria de la muerte fue: "múltiples heridas penetrantes a bala", respecto de las que el citado médico explicó en su primera declaración prestada ante la Brigada de Homicidios de Antofagasta en mayo de 2011, y en todas las posteriores que "se trataba de dos cuerpos de sexo masculino, eran

personas jóvenes, que presentaban múltiples impactos de bala, en las regiones del tórax y abdomen, sin contar específicamente cada una de las lesiones, pero puedo decir que eran más de treinta impactos cada uno"; de lo que se colige que, de ser verdad lo relatado por los hechores debió existir una gran y ruidosa balacera en el sitio donde explicaron que habrían ocurrido los hechos, sin embargo consultado don Juan Lara Arévalo, específicamente sobre los hechos, dado que su vivienda es contigua al lugar donde él indicó que se encontraba la Pesquera de Barros Arana, lugar muy cercano a las ruinas de la Ex Planta Kazacian, refirió no recordar haber escuchado rumores sobre haberse dado muerte a unas personas en el sector y recalcó que nunca se escucharon disparos ni algún sonido extraño en la zona en la época que se investiga, lo que le consta porque lleva viviendo en ese domicilio desde mucho antes de 1973 y todo el período del "Golpe Militar" lo pasó en ese mismo lugar. Estos dichos los refrendó en la audiencia de fojas 1587 y 1791. Del mismo modo doña Alicia Isabel Villarroel Gálvez, señaló que en ese tiempo vivían frente al matadero, donde sentía gritar los chanchos cuando los mataban, y por atrás habían roqueríos, era una casa antigua que estaba afirmada en pilares de madera, donde vivían varias personas, y por las ventanas que daban hacia el mar se veían los roqueríos; y el night club 130 y el restaurante de la señora Gina estaba hacia su izquierda, no se veía desde su casa pero estaba cerca, esa descripción que hace del lugar donde quedaba su domicilio coincide plenamente con lo aseverado por el testigo Juan Lara Arévalo a fojas 1315, quien refirió que donde actualmente se encuentra ubicado el Politécnico correspondía en la época a un matadero y que la AVENIDA Costanera llegaba hasta la numeración 130, lo que recuerda bien ya que en ese lugar funcionaba un cabaret que denominaban precisamente "cabaret 130", testimonios que

aunados a los testimonios gráficos de fojas 1342 y 1345, permiten concluir que el domicilio de la señora Villarroel quedaba muy cerca también del sector donde dijeron haber encontrado a las víctimas, lo que hace más absurdo aún que después de haber sido dejado en libertad se hubieren ido a ese lugar y no a su domicilio que quedaba a pocos metros; doña Alicia Villarroel indicó que esa noche del 7 de octubre de 1973, después de irse a su domicilio desde la unidad policial, porque ya se acercaba el toque de queda, esa noche estuvo afuera de su casa esperando a su pareja, incluso recuerda que le prendió una vela a una foto que tenía de él, y no recuerda haber sentido balazos esa noche, nadie le dijo que por ahí cerca haya habido una balacera. En suma, está suficientemente demostrado con los dichos de dos testigos presenciales que en el lugar donde dicen haber encontrado a las dos víctimas y donde algunos funcionarios admiten haberles disparado, eso no ocurrió, es evidente que les dispararon muchos balazos, pero no fue en ese lugar.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, de esta manera, no pudiendo establecerse que los hechos que produjeron la muerte de las dos víctimas ocurrieron en el sector de la ex pesquera aludido en la comunicación del Delegado Jefe del Estado de Sitio de la ciudad de Tocopilla, no existe una explicación lógica para creer que lo que esa información periodística le atribuye a la conducta desplegada por la Policía de Investigaciones fuera inventada por la autoridad mencionada, toda vez que esta misma institución en el informe a la orden de investigar, agregado a la causa de presunta desgracia, consignó esa misma circunstancia, esto es, que ese organismo fue quien le disparó y dio "de baja" (es decir mataron, a René Paredes y a Vino Valdés). Los elementos probatorios que se han descrito precedentemente permiten establecer que se dio una secuencia de hechos originados a partir del sábado 6 de octubre de 1973 con la

detención de Paredes Cortínez y Valdés Morales por la Inspectoría de la Policía de Investigaciones de Tocopilla, quienes los tuvieron bajo su exclusiva potestad ese día y el siguiente, y que al terminar el domingo 7 de octubre de 1973, los funcionarios aludidos los fueron a dejar a la morgue del hospital, asesinados, acribillados por más de treinta balas cada uno.

Asimismo, los dichos de uno de ellos al informar el requerimiento telefónico del juzgado de letras de Tocopilla respecto que René Paredes Cortínez habría sido dejado en libertad en la tarde del domingo 7 de octubre de 1973, se contrapone con los dichos de la testigo presencial doña Alicia Villarroel Gálvez, quien permaneció en la afueras del edificio de la Inspectoría esperando a su conviviente hasta las 19,30 horas, lo que ella justifica racionalmente señalando que no pudo permanecer hasta más tarde por temor a ser sorprendida infringiendo el toque de queda; por demás, resulta absurdo que después de esa hora hubiesen puesto en libertad a las víctimas, sabiendo que podrían haber sido detenidos nuevamente por Carabineros u otro organismo de las Fuerzas Armadas, sea el ejército o la armada, infringiendo el toque de queda y más insólito e inverosímil resultaría que, sabiendo perfectamente los funcionarios policiales de quienes se trataba por haber estado bajo su potestad más de veinticuatro horas en tiempo muy reciente, los hubiesen acribillado por "intentarse a la fuga", lo que tampoco resiste análisis -como ya se explicó- desde que los disparos no fueron en la espalda como debió ocurrir si se trataba de sujetos que evidentemente quisieron darse a la fuga, esto es, alejarse de quienes pretendían controlarlos; salvo que hubiesen tenido ambas víctimas la habilidad o capacidad de darse a la fuga caminando o corriendo hacia atrás, lo que de sólo pensarlo resulta trágico.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que del análisis de los antecedentes expuestos no cabe si no concluir que las víctimas René Paredes Cortínez y Vino Fidel Valdés Morales detenidos por la policía de Investigaciones de Tocopilla el 6 de octubre de 1973 y estando en poder de esa institución, fallecieron a las 22:30 horas del día 7 de octubre de 1973 en la ciudad de Tocopilla, producto de inundación pleuro-pulmonar múltiples impactos de bala, al primero y ruptura cardiaca, heridas múltiples a bala propinadas por terceros, a Valdés Morales.

Que la circunstancia de no haberse encontrado los cadáveres o sus restos óseos, al demostrarse que estarían enterrados en la fosa común del Cementerio Municipal de Tocopilla, desde donde no pudieron ser rescatados dadas las características y costos económicos y temporales asociados a la realización de una diligencia de exhumación completa a tal fosa; no es óbice para establecer el hecho de la muerte de ambas víctimas, desde que existen antecedentes concretos en la prueba rendida en el proceso que resultan suficientes para formar la convicción del Tribunal en tal sentido, como lo son los dichos de la testigo presencial doña Alicia Villarroel Gálvez, quien nunca alteró la versión de haber visto el cuerpo de la víctima René Paredes Cortínez en el Hospital de Tocopilla, dando detalles de la vestimenta que llevaba, que lo encontró fallecido y sobre su sepultación en el cementerio de Tocopilla, quien además refirió haber visto otro cuerpo junto al de su pareja, que podría corresponder a Vino Fidel Valdés Morales, circunstancias que sin variación sustancial fueron expresadas en la época de ocurrencia de los hechos, en causa Rol N° 241-73 del Juzgado del Crimen de Tocopilla y luego ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pese a existir entre éstas y aquellas más de 40 años de diferencia, siendo además coincidente su relato con los dichos del testigo

también presencial, el médico Horacio Castillo Hidalgo, en cuanto a que los cuerpos se encontraron efectivamente en la morgue del Hospital de Tocopilla, y respecto a las lesiones que las víctimas presentaban, las que se ubicaron, principalmente, en la parte delantera del cuerpo en la zona del estómago, señalando la testigo Villarroel que vio los cuerpos en el suelo con un paño que les vendaba el estómago, precisando posteriormente que René tenía vendas ensangrentadas desde las tetillas hacia abajo; y Castillo Hidalgo, por su parte, al referir que los cuerpos, a los que identificó como dos hombres jóvenes, de entre 20 a 22 años de edad, que estaban desnudos, presentaban múltiples impactos de bala (más de treinta) focalizados en la zona abdominal y torácica, le dio la impresión que todos los disparos eran de entrada, que las perforaciones de bala eran todas similares, de un centímetro aproximadamente, y aunque se reconoció no ser experto en la materia, supuso que pudieron haber sido causadas por una ametralladora. En este último aspecto, el informe de la Sección Armamento y munición de la Policía de Investigaciones de Chile de fojas 1647, señala que revisadas las "Tarjetas de Armamento" existentes en los archivos de esa sección, se constató que entre el 3 de agosto de 1965 al 20 de octubre de 1980, la actual Brigada de Investigación Criminal de Tocopilla, mantenía de cargo la subametralladora marca Star, modelo Z-45, calibre 9 9mm., serie N° Z10374. Todo ello, unido a la información que consta en el Libro de Sepultaciones del Cementerio Municipal de Tocopilla, cuyas fotografías acompañadas en CD en custodia a fojas 493, dan cuenta que figuran registrados con los números 196 (Paredes) y 198 (Valdés); siendo estos números exactamente los mismos que se leen en los certificados de defunción de las víctimas acompañados a fojas 43, 55, 93, 342 y 1415, respecto de Paredes Cortínez, y a fojas 22, 36, 70, 100 y 343, en el

caso de Valdés Morales. Considerando, además, las precisiones que a este respecto efectuó la Administradora del Cementerio aludido, quien también es clara al exponer que, por la información contenida en el libro de la época, y teniendo presente el tiempo que ha transcurrido desde la sepultación del ataúd, en el caso de René Paredes, ambos cuerpos probablemente se encuentren en la fosa común.

CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS:

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, los hechos descritos en el motivo precedente son constitutivos del delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 391 número 1º circunstancia primera del Código Penal, puesto que el asesinato de René Paredes Cortínez y de Vino Fidel Valdés Morales se ejecutó actuando los hechores con alevosía, esto es, sobre seguro, tratándose de dos personas que se encontraban detenidas bajo la potestad de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Tocopilla, y en esa condición fueron ultimados por los funcionarios que componían esa Inspectoría utilizando armas de fuego contra dos personas sometidas y desarmadas, en un contexto posterior al golpe militar en que las fuerzas policiales tenían el control total y absoluto del país. Existió sin duda, un elemento subjetivo, que fue el aprovechamiento de su estado de indefensión, circunstancia que fue creada por los propios perpetradores de este ilícito, quienes se valieron de este escenario para llevar a cabo su obrar "a traición y sobre seguro", quitándoles la vida, toda vez que está debidamente acreditado con los elementos allegados al proceso que, tanto René Paredes Cortínez como Vino Fidel Valdés Morales, permanecieron encerrados en la Inspectoría de la Policía de Investigaciones, aislados de su familia, lo que expuso la conviviente del primero, quien no lo pudo ver cuando lo tenían privado de libertad no obstante que le

señalaron que le llevara alimentos y abrigo, lo que ella hizo y, aunque no se tiene certeza acerca del real motivo porque decidieron "darlos de baja", siendo bastante probable que hayan sido sometidos a interrogatorios y vejámenes físicos y psicológicos por parte de Oficiales presentes en ese recinto, lo que era una constante en esa época, verificándose además, un claro aprovechamiento de este estado de indefensión, de quienes no podían reaccionar ni defenderse de estas acciones llevadas a cabo por los sujetos activos, los que se procuraron así un obrar sobre seguro y sin riesgo.

En este sentido, la alevosía es una calificante que actúa en la comisión del ilícito, que demuestra mayor peligro al bien jurídico protegido, la vida del ser humano, denotando un alto grado de peligrosidad por parte de los autores de estos ilícitos, quienes no tuvieron razones para temer el fracaso de su accionar y no corrían riesgos de ningún tipo, siendo mayor aún el reproche social de su actuar, por cuanto se desarrolló en relación a dos víctimas sometidas, superadas física y mentalmente, que no tuvieron posibilidad alguna de defenderse frente a ese ataque ilegal e injusto.

Que, sin embargo, la calificante de ensañamiento no pudo ser demostrada suficientemente, porque la sola circunstancia de haber disparado contra cada una de las víctimas más de treinta disparos no refleja necesariamente su concurrencia. Al efecto cabe considerar que la doctrina nacional ha coincidido en que el ensañamiento requiere tanto del elemento objetivo como del subjetivo para su concurrencia, conceptualizando el primero como la situación de provocar en el occiso un sufrimiento que puede calificarse de inhumano, un dolor magnificado, que se desprende de las circunstancias objetivas concurrentes como

el medio empleado, la forma de su uso, las condiciones y características del victimario y del ofendido. Por eso, los padecimientos inferidos a la víctima ajenos a la acción misma de matar no están comprendidos en la noción en estudio, ya que en la calificante el legislador no sanciona la causación de dolores, sino el aumento inhumano del inherente a la provocación del deceso (Mario Garrido Montt, El homicidio y sus figuras penales; Editorial Jurídica Conosur, Pág. 178 y siguientes). El elemento subjetivo está configurado por la intención concreta de provocar ese plus de sufrimiento, que objetivamente debe alcanzar el límite de lo inhumano, esto es, haber buscado conscientemente producir el resultado, escogiendo la forma precisa de aumentar la intensidad del sufrimiento. Sectores de la doctrina nacional han hecho residir este último aspecto en la deliberación, concebida como tranquilidad de ánimo, y en la falta de sensibilidad, de manera que postulan que no es posible concebir ensañamiento en la multiplicidad o ferocidad de las heridas que se infieran en el ímpetu emocional de la lucha, "ya que el paroxismo emotivo es incompatible con la deliberación e inhumanidad propia de esta calificante" (Alfredo Etcheberry, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III, Editorial Jurídica de Chile, pág. 67). La sola repetición de disparos sólo convence de la persistencia del ánimo homicida, no del ensañamiento; así lo indica Labatout (Derecho Penal Tomo II, Séptima Edición actualizada, Editorial Jurídica de Chile, pág., 166), quien señala que "del número de heridas causadas no puede deducirse la existencia del ensañamiento si con ellas no se han ocasionado sufrimientos innecesarios". En la especie, la prueba reunida en el proceso no permite alcanzar la convicción que los autores realizaron conductas que aumentaron deliberadamente el dolor de las víctimas, puede que haya sido así, no lo sabemos, la documental que da

cuenta de la muerte e incluso los dichos del médico que la constató y que describió a groso modo las múltiples heridas, no permite arribar a tal conclusión; incluso el doctor Horacio Castillo, consultado acerca de otros rasgos o lesiones que pudieran testimoniar que los afectados fueron sometidos a interrogatorios bajo tortura, como por ejemplo arrancamiento de las uñas u otros, respondió que no se había fijado en eso.

DELITO DE LESA HUMANIDAD

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, de los antecedentes allegados al proceso no fluyen elementos para determinar cuáles fueron las razones para detener a René Paredes y de Vino Valdés por los funcionarios de la Policía de Investigaciones, sin que surgieran indicios que ellos pertenecieran a algún partido, movimiento político u organismo sindical que identificaran los aprehensores como enemigos de la dictadura militar recién instaurada; sin perjuicio de lo anterior, el asesinato de estas víctimas si constituyen delitos de lesa humanidad, como se dirá a continuación.

Al deponer doña Alicia Villarroel Gálvez a fojas 1410 señaló que ellos eran "medio hippies" iban de un lado a otro donde arrendaban, René Paredes trabajaba en la feria, vendía verduras, pulseras o cualquier mercancía, eran como ambulantes, ella iba a ayudar a un restaurante, para pagar la pieza y Fidel, quien había llegado desde Iquique, también era comerciante. Expresó que este último se quedó en la pieza en que ellos vivían, le hicieron una cama en el suelo donde durmió una o dos noches, añadió que ellos (René y Fidel) salieron a dar una vuelta y cuando no llegaron se preocupó, estuvo esperándolos en un banco en la puerta de la casa, donde se ocultaba cuando pasaban los milicos y, al día siguiente salió a buscarlos a todas partes; agregó:

"sacando conclusiones, parece que los detuvieron porque eran afuerinos, ya que ninguno de los dos era de la ciudad". A fojas 341 aseveró que según lo que ella sabía René Paredes no tenía militancia política. Sin perjuicio de esta información que no los tipifica como víctimas políticas, toca traer a colación que en el Informe Sobre Calificación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación llegó a la convicción de que la muerte de René Paredes Cortínez y de VINO Fidel Valdés Morales, correspondieron a ejecuciones carentes de toda justificación, de responsabilidad de agentes del Estado, en violación de los derechos humanos más fundamentales, sin que se haya demostrado siquiera un intento de fuga del cuartel (al indicar que fueron detenidos por la Policía de Investigaciones de Tocopilla).

En este sentido, cabe también señalar que la Excma. Corte Suprema en varios fallos ha reconocido que no solo los casos de persecución política implican un atentado a los derechos humanos. En efecto, si atendemos a lo resuelto en la causa Rol Nº 78.951-2016, en sentencia de 25 de mayo de 2017, manifestó: "CUARTO: Que, sin embargo, como reiteradamente ha señalado esta Corte y recoge acertadamente el recurso, se denominan crímenes de lesa humanidad aquellos injustos que no sólo contravienen los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, de suerte tal que para la configuración de este ilícito existe una íntima conexión entre los delitos de orden común y un valor agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona, porque la característica principal de esta figura es la forma cruel con que diversos hechos criminales son perpetrados, los que se contrarían de forma evidente y

manifiesta con el más básico concepto de humanidad; destacándose también la presencia del ensañamiento con una especial clase de individuos, conjugando así un eminente elemento intencional, en tanto tendencia interior específica de la voluntad del agente. En definitiva, constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes." Y más adelante señala: "SEXTO: Que con ocasión del estudio del elemento de contexto del crimen de lesa humanidad, contenido en el preámbulo del artículo 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional, la doctrina más autorizada ha señalado que dicho precepto convierte en crimen de lesa humanidad los actos individuales enumerados en dicha disposición, en tanto cumplan con el test sistemático general. Esta prueba se propone para garantizar que los actos individuales, aislados o aleatorios, no lleguen a constituir un crimen de lesa humanidad. Mientras que el término "generalizado" implica un sentido más bien cuantitativo: que un acto se llevará a cabo a gran escala, involucrando a un gran número de víctimas, la expresión "sistemático" tiene un significado más bien cualitativo que requiere que el acto se lleve a cabo como resultado de una planificación metódica. Sin perjuicio que la jurisprudencia siempre ha optado por una lectura disyuntiva o alternativa de estos elementos, se ha destacado que lo más importante ya no es el significado aislado que aporta cada uno de estos elementos expresados de modo alternativo, sino el que adquieren al interconectarse, en la medida en que la "comisión múltiple" debe basarse en una "política" de actuación, sólo su existencia convierte múltiples actos en crimen de lesa humanidad. Este elemento -de la política-

deja claro que es necesario algún tipo de vínculo con un Estado o un poder de facto y, por lo tanto, la organización y planificación por medio de una política, para categorizar de otro modo los delitos comunes como crimen de lesa humanidad (Ambos, Kai. "Crímenes de Lesa Humanidad y la Corte Penal Internacional"); SÉPTIMO: Que en ese orden de ideas, cabe reiterar que el recurrente arguye que respecto de las hipótesis que prevén los crímenes contra la humanidad, a saber, el "ataque generalizado" y el "ataque sistemático" contra la población civil, en el caso de estos antecedentes nos encontramos frente a un ataque indiscriminado, que no exige que la víctima haya tenido una militancia política u opción política definida, o que el delito se haya cometido a causa de tal militancia u opción política de la víctima, lo cual supone que la propuesta de nulidad deriva de la consideración que el régimen imperante a la época de la muerte del ofendido, **correspondió con una política estatal de control que autorizó a los agentes del Estado para detener, afectar la integridad e incluso privar de la vida a los ciudadanos**. Por otro lado, consta de autos que con ocasión de estos hechos se instruyó un proceso militar por el 2do. Juzgado Militar de Santiago, Rol N°875-77, en que los agentes estatales no fueron considerados responsables de delito alguno, ya que fueron absueltos con fecha 10 de diciembre de 1980, lo cual pone de manifiesto que su actuar al menos contó con el beneplácito o tolerancia de los responsables de diseñar e implementar esta política estatal de control del orden público". En el caso que nos ocupa, no se hizo investigación por la Fiscalía Militar e incluso el proceso que se inició en la justicia ordinaria, que ya se ha individualizado precedentemente, no investigó la muerte, y la resolución que sobreseyó definitivamente la causa porque el "hecho investigado es constitutivo de delito", fue aprobada por la

Corte de Apelaciones de Antofagasta, el 3 de diciembre de 1973 con declaración que se trataba de un sobreseimiento temporal. El fallo de la Excm. Corte que se ha venido analizando, continuó razonando explicando que: "OCTAVO: Que en este contexto, los hechos que causaron la muerte de González Cerda a causa de las maniobras dolosas desplegadas por los funcionarios estatales pueden constituir un delito de lesa humanidad, pues es incuestionable, no sólo en atención a los hechos del proceso sino, además, por lo que ha sido demostrado por diferentes informes, que en la época se implementó una política estatal que consultaba la represión de posiciones ideológicas contrarias al régimen, pretendiéndose la seguridad interna al margen de toda consideración por la persona humana a través de maniobras de amedrentamiento a los civiles y, sobretodo, la garantía de impunidad que el mismo régimen generó ante las responsabilidades penales y de todo orden, entre otras actuaciones, lo que ha sido recogido en autos al encontrarse González Cerda en la nómina de víctimas de violación de sus derechos humanos por agentes del Estado que hicieron uso irracional de la fuerza, conforme lo concluido por el Consejo Superior de la Comisión Rettig, según aparece del Informe que ésta evacuara sobre calificación de víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política, lo que habilitó a la señora Fiscal Judicial para formular el requerimiento respectivo y solicitar la instrucción del sumario correspondiente". En la especie, no fue la Fiscalía Judicial quien impulsó el procedimiento, pero si lo hizo el Sr. Subsecretario del Ministerio del Interior, basado en las conclusiones a la que arribó la Comisión de Verdad y Reconciliación. En la sentencia de reemplazo dictada al acoger el recurso de casación en el fondo la Corte dictaminó: "Que los hechos indagados se han producido en virtud de una política

estatal de represión y control ejecutada al margen de toda consideración por la persona humana, amedrentando a la población y otorgando una garantía de impunidad que el mismo régimen generó ante las responsabilidades penales y de todo orden, de manera que ellos no pueden ser calificados en modo alguno como un comportamiento negligente y menos de carácter común".

Que, no solo en la sentencia recién citada se ha reconocido que estamos ante un delito de lesa humanidad aun cuando el móvil para cometer el homicidio no haya sido una persecución política, es así que a modo de ejemplo pueden traerse a colación otras, como la causa Rol N° 3781-2015 de la Excma. Corte Suprema, recaída en un recurso de casación en el fondo, donde también se consideró delito de lesa humanidad el homicidio de Mario Iván Lavanderos Lataste, a la sazón mayor y alumno de la Academia de Guerra del Ejército, ocurrido el 16 de octubre de 1973 en el casino de la Academia indicada, cometido por el Teniente Coronel David Reyes Farías, mediante un disparo de arma de fuego, apoyando el cañón sobre el lado izquierdo del labio superior. También podemos citar la causa del máximo tribunal, Rol N° 34.392-2016, de 21 de marzo de 2019, seguida en contra de Alfonso Gabriel Videla Valdebenito, por el delito de homicidio de Miguel Estol Mery, padre de José Miguel Estol Larraín, quien habría herido a un alumno de la Academia Politécnica Militar, René Arroyo Quijada, el 23 de agosto de 1973 (esto es, antes del golpe militar de septiembre de ese año). En la Academia aludida se ordenó un sumario administrativo que estuvo a cargo del capitán Videla y éste, el 23 de octubre de 1973, reunió un contingente militar con personal de la Academia citada para allanar un inmueble y detener a Estol Larraín, ocasión en que uno de los integrantes de la patrulla militar le disparó al occiso con un fusil Mauser que portaba, en dos

oportunidades, causándole la muerte. En ese proceso, esos hechos que no tenían por objeto la represión política, también fueron considerados como un delito de lesa humanidad, porque "se cometió como parte de la agresión generalizada o sistemática contra la población civil y en conocimiento sus autores de dicho ataque, abusando éstos del poder que les confería la entidad militar" (motivo cuarto del fallo).

EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN:

CUADRAGÉSIMO: Que la acusación fiscal se dirigió en contra de Luciano Astete Almendras, Osvaldo Carmona Otero, Sergio Leonardo Méndez Henríquez, Nelson Nicks Ávalos Rauld, Hernán Gilberto Salinas Solari y Ricardo Gilberto Gómez Centella.

Habrá que considerar que Nelson Nicks Ávalos Rauld y Hernán Gilberto Salinas Solari, fallecieron con posterioridad a la acusación, por lo que junto a esta sentencia se dictarán los correspondientes sobreseimientos parciales y definitivos a su respecto.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, según lo que se ha venido expresando en las motivaciones respectivas a la determinación del hecho punible, en el ilícito investigado habrían tenido participación los miembros de la Inspectoría de la Policía de Investigaciones de Chile de la ciudad de Tocopilla, de este modo, cabe tener presente para determinar la participación de los acusados los siguientes elementos que son comunes a todos ellos:

a) De acuerdo a lo informado a fojas 120 por la Jefatura del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, la Inspectoría de Tocopilla durante el año 1973 estaba compuesta por el Subcomisario José Fuentes Berrocal, el Subinspector Sergio Méndez Henríquez y los detectives

Luís Ríos Paredes, Osvaldo Carmona Otero, Ricardo Gómez Centellas, Nelson Avalos Rauld y Hernán Salinas Solari. Respecto de Luis Ríos Paredes consta a fojas 454 que a partir del 1º de junio de 1973 se le autorizó ocho meses de permiso sin goce de remuneración hasta el 31 de enero de 1974, y llegada esa época solicitó una prórroga por 15 días más a contar del 1º de febrero al 15 de febrero de 1974, con ello se comprueba la efectividad de lo expresado por él a fojas 375 y siguientes, en orden a que no estaba en funciones en la unidad de Tocopilla al 7 de octubre de 1973. De lo anterior se colige que el personal de dicha Inspectoría al 7 de octubre de 1973 lo componían solo seis funcionarios miembros activos de la Policía de Investigaciones de Chile.

b) Que, en segundo término, del mismo documento de fojas 120 se comprueba que el único funcionario de apellido Gómez, era Ricardo Gómez Centellas, en consecuencia, aunque éste no negó tajantemente -al ser consultado por los funcionarios policiales-, admitió únicamente como una posibilidad que él hubiese entregado la información que el Ministro de Fe del Tribunal requirió por orden del juez el día 8 de octubre de 1973 a las 12,30 horas, admitiendo que René Paredes Cortínez estuvo detenido en el cuartel de la Policía de Investigaciones, único edificio que en esa época ocupaba esa institución, que se denominaba Inspectoría, oportunidad en que señaló que René Paredes Cortínez habría sido dejado en libertad el día anterior en la tarde. De esa circunstancia se colige que el día en cuestión este funcionario se encontraba en funciones, lo mismo que todos los demás funcionarios de la policía civil que pertenecían a esa unidad policial, antecedente que se corrobora con sus hojas de vida que dan cuenta -con la salvedad de Ríos Paredes- que ninguno de ellos estaba haciendo uso de

licencia médica, permiso o de vacaciones el día preciso en que ocurrieron estos hechos.

c) Que el inmueble donde funcionaba la Inspectoría de Investigaciones de Chile a octubre de 1973, aunque ahora está abandonado, aún se encuentra en pie, como se apreció en la inspección del Tribunal de fojas 1313 y siguientes. Asimismo, del croquis y fotografías que se adjuntaron a fojas 1335 y 1339, las últimas en formato digital, se aprecia que no se trataba de un inmueble de grandes dimensiones, con una superficie de aproximadamente 365 metros cuadrados, distribuidos en un solo piso; en consecuencia, cualquiera cosa, hecho o situación que aconteciera en su interior, e incluso la detención de personas, no podía ser ignorado, pasar desapercibido o inadvertido por ninguno de los funcionarios de la Inspectoría.

d) Que los diarios de la época publicaron la noticia titulada "Dos muertos por no respetar toque de queda en Tocopilla", donde se indica que esa información emanó de un comunicado emitido la tarde del lunes (debe corresponder al 8 de octubre de 1973) por el Prefecto de Carabineros, Teniente Coronel y Delegado Jefe de Zona en Estado de Sitio, Luciano Astete Almendras, y allí se expresó: "Se pone en conocimiento de la ciudadanía, que anoche, alrededor de las 22,30 horas en circunstancias que personal de la Inspectoría Local de Investigaciones efectuaba rondas de poblaciones, al pasar por el sector de la ex Planta Kazazian, sorprendió a tres individuos en actitudes sospechosas a quienes se les ordenó detenerse, no obedeciendo este requerimiento, dándose a la fuga por el camino que bordea el mar hacia el norte, motivo por el cual **el personal de investigaciones disparó en su contra**". "A consecuencia de lo anterior, **fueron dados de baja dos de**

estos individuos, que no han sido identificados, logrando el tercero huir por los roqueríos en dirección a las instalaciones de la Pesquera Guanay, siendo imposible su detención debido a la oscuridad reinante en el sector". "Los infractores al toque de queda **fueron trasladados a la morgue del Hospital local para su autopsia médico legal**". Esa información comenzaba señalando que: "**Personal de Investigaciones de Tocopilla dio de baja a dos individuos la noche del domingo, al ser sorprendidos en actitudes sospechosas después de la hora inicial de toque de queda (...)**". Más adelante en la misma publicación se señala: "se aclara el comunicado de esta fecha, sobre infractores al toque de queda **dados de baja por personal de Investigaciones, anoche a las 22:30 horas, de la Ex Planta Kazazian**, en el sentido que fueron identificados y se trata de los delincuentes habituales VINO FIDEL VALDÉS MORALES, alias "El Fidel" o "El Chino", 24 años, soltero, sin oficio ni domicilio conocidos; y RENÉ PAREDES CORTINEZ, alias "El flaco Cortínez", 21 años, soltero, también sin oficio ni domicilio conocido". Sobre la copia de publicación se lee una leyenda manuscrita que reza: "Mercurio. Calama. 11/10", posteriormente, la inspección personal del tribunal a dependencias de **El Mercurio de Antofagasta** pudo establecer que esa publicación correspondía a la edición del 11 de octubre de 1973.

e) Que en la causa Rol N° 241-73, seguida ante el Juzgado de Letras Tocopilla por presunta desgracia, iniciada el 8 de octubre de 1973 con la denuncia realizada por doña Alicia Isabel Villarroel Gálvez por la detención de su conviviente, René Paredes Cortínez, a fojas 4 de la misma, consta el Oficio N° 1387, de 19 de octubre de 1973, remitido por la Comisaría de Carabineros de Tocopilla al Tribunal, dando cuenta que la víctima fue muerta por no respetar el toque de queda y tratar de huir de la patrulla

que lo interceptó el 7 de octubre de ese mismo año, a las 22:30 horas, hecho que fue puesto en conocimiento de la ciudadanía mediante comunicado de 8 de octubre de 1973, del Sr. Delegado del Jefe de Zona en Estado de Sitio, Tte. Coronel Luciano Astete Almendras. A fojas 8, rola un informe policial que comunica que el 7 de octubre, alrededor de las 22:30 horas, personal **"de esta unidad"** (de la Policía de Investigaciones) efectuaba Ronda de Población, cuando sorprendieron a tres individuos en el sector costero norte, cerca de la Planta Kazazian, que no respetaron la voz de "alto", dándose a la fuga, obligando al uso de armas de fuego, siendo dos de éstos dados de baja y trasladados a la morgue, resultando uno de los muertos ser René Paredes Cortínez. Este parte policial aparece firmado por el sub inspector Sergio Méndez Henríquez quien además figura como encargado del cumplimiento de la orden de investigar, y por José Fuentes Berrocal, Subcomisario Jefe, quien dio el visto bueno a esa diligencia.

f) Que el Subcomisario Jefe **José Ricardo Fuentes Berrocal**, depuso a fojas 116, 173, 412 y 419, además de las declaraciones compulsadas de causa Rol N° 2182-98 Episodio "Tocopilla" a fojas 1713, 1715 y 1716. En lo pertinente refirió haberse desempeñado como Jefe de la Inspectoría de Tocopilla para el año 1973. Indicó que el 11 de septiembre de ese año tuvo una reunión en la Gobernación con el Mayor de Carabineros de apellido Astete, otro funcionario de apellido Salazar y el Capitán de Puerto de apellido Fuentes. Al día siguiente, se le comunicó por una circular del Fiscal de Carabineros que, tanto Salazar como un Mayor de Carabineros, se harían cargo de la Gobernación, y que éstos comenzarían a enviarle órdenes de detención contra personas subversivas, de preferencia dirigentes de organismos públicos y empresas. Luego de ello, comenzaron a detener a personas que aparecían en un listado, para ser

puestas a disposición del Fiscal de Carabineros, así como a controlar toques de queda. Refirió haber participado personalmente de estos procedimientos y que lo ocurrido era informado a Carabineros. Sobre los hechos investigados en este proceso, declaró que un día de octubre de 1973, alrededor de la 01:00 a.m., mientras realizaban patrullajes en un jeep color blanco junto a los funcionarios de la Inspectoría Méndez, Carmona, Gómez y Salinas, encontrándose a dos cuadras de la playa, se separaron en parejas de dos detectives (Méndez con Carmona y Gómez con Salinas), quedándose él en el jeep, custodiando lugares cercanos, sintió 4 o 5 disparos y luego una ráfaga, **viendo a Méndez quien venía con una metralleta y le informó que unos sujetos infractores del toque de queda no obedecieron la orden de detenerse, por lo que habían disparado al aire, y luego en su contra, disparando entonces la ráfaga.** Se acercó a verificar la muerte de las personas, comunicándose con una ambulancia para que las trasladaran al Hospital. Luego volvieron al cuartel e informaron de lo ocurrido a la Fiscalía.

No recuerda si informó de los hechos al Prefecto de la PDI de Antofagasta, Sandoval Casanga. A fojas 173 ratificó la declaración policial. A fojas 412 añadió que los hechos fueron investigados por la Fiscalía, dándose cuenta a ellos de lo ocurrido. Agregó no recordar que Astete lo haya llamado por la publicación de prensa y que no prestó declaraciones en alguna investigación por este hecho. A fojas 417, en diligencia de careo con el acusado Osvaldo Carmona Otero, dijo que efectivamente no participó Gómez, sino Ávalos. A fojas 1713, en declaración efectuada en los autos Rol N° 2182-98 "Episodio Tocopilla" cuaderno principal, tramitado por el Ministro de Fiero don Mario Carroza Espinosa, el 13 de mayo de 2008, señaló que el cuartel estaba conformado por 6 personas, uno de nombre

Sergio Méndez que era el 2º Jefe, Osvaldo Carmona, un funcionario de apellido Salinas, otro de apellido Gómez e indicó: **"ellos me acompañaban en toda la labor policial que se efectuaba quedando un funcionario a cargo de las comunicaciones y un administrativo cuyos nombres no recuerdo"**. En declaración policial de fojas 86 del cuaderno de documentos Sergio Méndez Henríquez y a fojas 84, Nelson Ávalos Rauld, señalaron que el telecomunicador se llamaba Crescencio Oliva.

g) Que **Hernán Gilberto Salinas Solari**, en declaraciones de fojas 91, 174 y a fojas 414 en diligencia de careo con José Fuentes Berrocal, manifestó haber ingresado en 1964 a la Policía de Investigaciones, siendo destinado en 1971 a la Inspectoría de Tocopilla, ostentando para el año 1973 el grado de Detective 4º, lo que, según declaró, lo situaba como el último hombre en la escala de mando de esa unidad policial. Refirió que días después del 11 de septiembre de 1973 se les comunicó que quedarían a disposición de la autoridad de carabineros, entre ellos, del Fiscal de Carabineros Julio Salazar Lantery. Además, indicó que las autoridades civiles fueron relevadas de sus cargos, asumiendo en su lugar el Prefecto de Carabineros de apellido Astete. Expresó que, por razones de espacio, carabineros comenzó a trasladar detenidos al cuartel policial. Confesó que le correspondió custodiar a estos detenidos cuando se encontró en servicio de guardia. Refirió que luego de ese 11 de septiembre siguieron desarrollando sus labores como funcionarios de investigaciones, cumpliendo las órdenes encomendadas por los Tribunales de Justicia, pero que, con el tiempo, tras la llegada de personal militar y de infantes de marina, se les ordenó la realización de controles de toque de queda y patrullajes nocturnos. Aclaró que cada institución salía a controlar independientemente y con sus propios medios, sin

recordar haber detenido a personas por infracción al toque de queda u otros motivos. En diligencia de careo de fojas 414, refirió no haber participado en el procedimiento señalado por Fuentes Berrocal en sus declaraciones, y dijo recordar solamente que en una oportunidad **se encontraron a dos personas heridas en la playa, en el sector de los roqueríos, personas a las que no pudo ver bien, puesto que estaba oscuro, pero que fueron trasladadas por ellos al Hospital** en el vehículo policial, que era un Land Rover, y que en ese momento se encontraba presente Carmona, llegando posteriormente Fuentes, Ávalos y Méndez, quien conducía el vehículo. Comentó que en ningún momento vio a Gómez. A fojas 74 del cuaderno de documentos ordenado formar a fojas 659, indicó en declaración policial de Julio de 2002, que en relación a la muerte de dos personas por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones en la ciudad de Tocopilla esto es efectivo ya que en una oportunidad en que realizaban un patrullaje se encontraron con un robo con intimidación, cuyos autores resultaron ser delincuentes y se dieron a la fuga, cuando fueron sorprendidos en delito flagrante, situación de lo cual se dio cuenta al respectivo Tribunal, no recordando la fecha exacta, pero al parecer en el mes de octubre. El 2014 en declaración judicial de fojas 75 de ese mismo cuaderno después de confirmar lo señalado en la declaración policial, aclaró que si bien es efectivo haber encontrado baleadas a dos personas en la playa, durante la noche, en horas del toque de queda, no es efectivo que ellos hayan intervenido directamente en ese hecho, lo que hicieron por orden de Fuentes Berrocal fue trasladarlos a estas personas al hospital y posteriormente supo que fallecieron.

h) Que **Nelson Ávalos Rauld** en Tomo I a fojas 373, 403 y careo con José Fuentes Berrocal a fojas 415, manifestó que ingresó a la Policía de Investigaciones en 1963, siendo

destinado en 1973 a la ciudad de Tocopilla, cumpliendo funciones como Inspector. Dijo que el 11 de septiembre de 1973 se constituyó como máxima autoridad de Tocopilla el Prefecto de Carabineros Luciano Astete, quien se entendía con el jefe de la unidad policial, Fuentes Berrocal, para estar al tanto de todo lo que acontecía en la ciudad. En relación a los hechos investigados en este proceso declaró que cerca de las 23:00 horas de un día que no recuerda, pero cercano a aquel 11 de septiembre, mientras realizaban patrullajes en el borde costero de la ciudad, **sintieron unos disparos de metralletas. En ese momento se encontraba en compañía del jefe de la unidad, además de Méndez, Carmona y Salinas, todos quienes iban en un jeep Land Rover, único vehículo que tenía la unidad policial. Declaró que, tras sentir los disparos, el funcionario que conducía el vehículo se detuvo, bajándose todos a verificar lo que pasaba, observando con las luces del vehículo y unas linternas a una o dos personas tendidas sobre los roqueríos, quienes se quejaban, dándole la impresión que estaban heridos, siendo lógico para él que eran lesiones por arma de fuego, por los disparos que escucharon momentos antes.** Refirió que su jefe ordenó trasladar a las personas al Hospital. Dice que él no concurrió al Hospital, sino que se fue caminando a la unidad policial, puesto que no había más espacio en la camioneta. Agregó que su jefe comunicó lo ocurrido al Prefecto de Carabineros, y por su intermedio a otras autoridades, y que no se realizó ninguna diligencia posterior para indagar sobre la muerte de esas personas, pues el jefe no lo dispuso ni recibió órdenes al efecto. Aseguró que las personas heridas nunca estuvieron detenidas en el cuartel policial. Dijo que a Tocopilla llegó personal del Ejército e Infantes de Marina a cumplir funciones. En diligencia de careo de fojas 415, declaró que al parecer Méndez era quien conducía el jeep esa noche.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que los dichos de esos tres funcionarios ya fallecidos, dos de los cuales tuvieron la calidad de acusados en este proceso, dan cuenta de su participación en los sucesos investigados, al menos en lo que respecta al hecho de haber tenido contacto con las víctimas antes de ir a dejarlos a la morgue del Hospital de Tocopilla, pues ya se dejó establecido que la versión que ellos entregan sobre la muerte o asesinato de las víctimas no resulta verosímil a lo que en verdad ocurrió de conformidad a la prueba rendida en el proceso, según ya se estableció. De lo que cabe concluir que esos dichos únicamente se apegan al libreto que en esa oportunidad construyeron para darlos a conocer a la ciudadanía, cuando pretendieron justificar el asesinato de Paredes y Valdés.

Es así que Fuentes Berrocal, refiere que el segundo en jerarquía en las Inspectoría Méndez portaba una metralleta y le señaló que dos sujetos no habían respetado la voz de alto y un disparo de advertencia, y que les disparó una ráfaga; y señaló que en ese instante él se acercó a constatar la muerte de esas dos personas, luego llamó a una ambulancia para que los llevara a la morgue. Salinas por su parte señaló que se encontraron a dos personas heridas en la playa, en el sector de los roqueríos, personas a las que no pudo ver bien porque estaba oscuro, pero que fueron trasladadas por ellos al Hospital. Avalos expuso que mientras realizaban patrullajes en el borde costero de la ciudad, sintieron unos disparos de metralletas. En ese momento se encontraba en compañía del jefe de la unidad, además de Méndez, Carmona y Salinas, quienes se trasladaban en un jeep Land Rover, único vehículo que tenía la unidad policial. Declaró que, tras sentir los disparos, el funcionario que conducía el vehículo se detuvo, bajándose todos a verificar lo que pasaba, observando con las luces del vehículo y unas

linternas a una o dos personas tendidas sobre los roqueríos, quienes se quejaban, dándole la impresión que estaban heridos, siendo lógico para él que eran lesiones por arma de fuego por los disparos que escucharon momentos antes; en suma, las tres versiones son diversas entre sí, Fuentes dice que Méndez disparó y mató a dos personas, Salinas que solo encontraron a dos personas heridas y Avalos que sintieron disparos de metralleta y al acercarse a los roqueríos encontraron a dos personas "heridas". Fuentes señala que llamó la ambulancia (sin explicar como lo hizo, en la época no era muy fácil realizar esa comunicación); Salinas y Avalos refirieron que los llevaron en el Jeep en que ellos se trasladaban, aunque difieren en que Avalos dice que él se fue a pie a la Unidad porque no cabía en el jeep. Obviamente si las tres personas vivieron ese mismo acontecimiento es imposible que las versiones sean tan disimiles, alguien o todos ellos están mintiendo; y habiéndose establecido que los hechos no ocurrieron en el lugar en que ellos sitúan el sitio del suceso, porque hay dos testigos presenciales, quienes a muy poca distancia de ese sitio no escucharon los disparos que ellos aluden y, por supuesto, menos es posible admitirlos en la cantidad de disparos que presentaban cada uno de los cuerpos como también ya quedó establecido. También se descartó la versión que les dispararan mientras se daban a la fuga, porque los disparos fueron en la parte anterior o delantera del cuerpo y no en la espalda como debiera haber ocurrido si lo expresado por estos sujetos se apegara a la realidad.

De la prueba antes colacionada, está absolutamente comprobado que los funcionarios de la Inspectoría de la Policía de Investigaciones de Tocopilla fueron quienes dispararon y dieron "de baja", como lo informaron al público a través de un comunicado emanado del Delegado del Jefe de Zona Mayor Luciano Astete de Carabineros, teniendo

en cuenta, además, que lo hicieron en un diario proclive al régimen militar recién instaurado, de lo que se colige que no cabe la idea que se pudiera haber adulterado esa información y que se hubiese culpado indebidamente a dichos funcionarios. Lo mismo da cuenta el informe policial suscrito por Méndez y Fuentes Berrocal, pieza documental que al haber sido incorporado al expediente mencionado constituye un instrumento público, donde se indica en forma categórica que los funcionarios de la Policía de Investigaciones sorprendieron a tres individuos infringiendo el toque de queda y al no respetar la advertencia para que se detuvieran se vieron obligados a usar las armas de fuego, siendo dos de éstos dados de baja (o sea asesinados) y trasladados a la morgue. Ya se verá que Méndez argumentó que firmó ese documento en blanco y que lo habría llenado Fuentes Berrocal, sin embargo no explica cual habría sido la razón o interés de inventar esa explicación por parte del jefe de la unidad policial, lo que desde luego abomina a la lógica y a la inteligencia, ya se volverá más adelante sobre este punto.

Fuentes dijo que componían la patrulla Méndez, Carmona, Gómez y Salinas, aunque después en un careo indicó que no iba Gómez, pero si Avalos. Salinas señaló que andaba con Carmona, llegando posteriormente Fuentes, Ávalos y Méndez; y el funcionario Avalos señaló que andaban con ellos el jefe de la unidad, además de Méndez, Carmona y Salinas. O sea existe concordancia que andaban todos ellos, salvo en lo que respecta a Gómez, quien después de indicar que también formaba parte del grupo, luego lo excluyeron; en todo caso hay que recordar que la versión de estos funcionarios aparece del todo inventada respecto del lugar y forma en que ocurrieron los hechos y también respecto a la circunstancia de tratarse de infractores del toque de queda, se demostró que ellos mismos habían detenido el día

anterior a las dos víctimas y que ese día Domingo, a lo menos hasta la hora en que comenzaba el toque de queda, esto es, dos horas y media antes de la data de la muerte, permanecían bajo su potestad y arbitrio. De esta manera resulta inverosímil que en esas circunstancias y en un patrullaje, casi inmediatamente posterior a ese hecho les tuvieran que disparar por "infringir el toque de queda".

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que el acusado Osvaldo Carmona Otero, declaró a fojas 159, 194, 417 en diligencia de careo con José Fuentes Berrocal y a fojas 1680. Refirió haber ingresado a la Policía de Investigaciones en 1964, llegando a Tocopilla entre 1969 y 1970. Manifestó que luego del 11 de septiembre de 1973 la ciudad quedó al mando de un jefe de la marina, siendo nombrado posteriormente como Jefe de Plaza el Prefecto de Carabineros de apellido Almendras, a quien le seguía en mando el Fiscal y Teniente Coronel de Carabineros, Juan Salazar Lantery. Dijo que la Policía de Investigaciones continuó trabajando con los Tribunales de Justicia, pero que además se recibían órdenes de la Fiscalía de Carabineros, realizaron controles por toque de queda y custodia de detenidos, los que eran conducidos al cuartel por funcionarios de carabineros o militares. Consultado sobre los hechos, recordó que una noche, sin poder precisar la fecha, mientras realizaba rondas a pie con Hernán Salinas, cerca de la playa, escucharon disparos, por lo que se acercaron a los roqueríos, encontrándose en el lugar con el jefe de la unidad, acompañado de Nelson Ávalos Rauld, quienes les dijeron que había dos personas heridas. Entonces, miró hacia un costado y vio a dos sujetos de pie, uno hablando mucho y el otro se quejaba. Inmediatamente, subieron a los heridos al vehículo policial, que era un jeep, y los trasladaron al Hospital. Manifestó no recordar si el jeep era conducido por el jefe o por Méndez, pero que atrás iban Salinas, Ávalos y él.

Agregó que al llegar al Hospital dejaron a los heridos, a quienes vio bien, para luego retirarse del lugar, quedando el jefe encargado de dar cuenta de lo sucedido a las autoridades institucionales y a la Fiscalía. No constató las heridas de esas personas, pero presumió que habían sido lesionadas por los disparos que escucharon antes. Luego se enteró que ambas personas habían fallecido, sin recordar cómo lo supo. A fojas 194 añadió que los hechos ocurrieron detrás de la playa "Los Muertos", aproximadamente en septiembre de 1973, mientras permanecían acuartelados, y que los heridos se subieron solos al jeep. En diligencia de careo de fojas 417 dijo que Gómez no estuvo presente en esos hechos.

Que consta de las hojas de vida anuales mantenidas en custodia a fojas 1673, que el acusado Carmona Otero se desempeñó en 1973 como Detective 2º, grado 1º, en la Inspectoría de Tocopilla.

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que la participación de Carmona se encuentra absolutamente demostrada, está confeso que formaba parte del grupo de funcionarios de la Policía de Investigaciones que dio "de baja" a las víctimas, si bien expresa una circunstancia que ninguno de los demás menciona, resultando casi irrisoria su versión, ya que según él los dos sujetos estaban de pie, uno se quejaba y el otro hablaba mucho, eso es inverosímil, no solo porque nadie más refiere tan tamaña mentira, sino porque basta recordar que cada una de las víctimas presentaba más de treinta balazos en su cuerpo, casi todos en la zona abdominal y torácica, lo que hace imposible que estuvieren en el estado que él señala; de este manera, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal, las circunstancias que invoca este acusado no están comprobadas en el proceso, por lo que no

se le dará valor alguno, atendido al modo en que verosímilmente acaecieron los hechos, según los datos que arroja el proceso para apreciar los antecedentes.

Que, es conveniente tener presente que la atribución de responsabilidad no obedece únicamente a la circunstancia de pertenecer a la Policía de Investigaciones y ser parte de la Inspectoría de Tocopilla en la época en que ocurrieron los hechos, sino por formar parte directa del grupo que ultimó a las víctimas de acuerdo a su propia confesión, los dichos de coimputados, además de todas las circunstancias que se han referido y que se tuvieron por comprobadas según se especificó en los motivos 41 y 42 precedentes.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que el acusado Sergio Leonardo Méndez Henríquez depuso en Tomo I fojas 156 (en julio de 2011) y a fojas 172 (en enero de 2012), también a fojas 413 en careo con José Fuentes Berrocal. En Tomo II, en careo con Alicia Villarroel Gálvez a fojas 629 y en el Tomo III a fojas 1709.

Dijo haber ingresado a la Policía de Investigaciones en 1957, siendo destinado a Tocopilla en 1971 y que para el 11 de septiembre de 1973, mientras se encontraba acuartelado en el cuartel policial, llegó a la unidad una patrulla de militares y sostuvieron una reunión con Fuentes Berrocal en su oficina. Señaló que a partir de ese momento el cuartel se transformó en un lugar de tránsito de detenidos, pues los funcionarios de carabineros y militares llevaban al lugar a personas en esa calidad, quienes quedaban bajo custodia de los policías. Detalló que dentro de las funciones especiales que le tocó realizar fue el control de toque de queda, que comenzaba alrededor de las 17:00 horas y finalizaba a las 6:00 horas del día siguiente; además del diligenciamiento de órdenes de

detención provenientes de la Fiscalía de Carabineros. Recordó que un día, sin poder especificar la fecha, le dijeron que había sido designado para realizar un servicio en la población, debiendo presentarse en la unidad a las 22:00 horas, correspondiéndole conducir el vehículo policial, un jeep Land Rover. Expresó que a su lado iba el jefe del cuartel, y como tripulantes iban Salinas, Carmona y Ávalos. Dijo que se desplazaron al norte de la ciudad, deteniéndose en un burdel donde siempre ocurrían problemas, bajándose sus compañeros, quienes al cabo de un tiempo retornaron al vehículo. Se dirigieron posteriormente a la costa de la ciudad, parándose a un lado del camino. Sus compañeros se volvieron a bajar, mientras él se quedó en el jeep. Refirió que al cabo de unos 15 a 20 minutos, uno de ellos, sin recordar quién, le gritó que acercara el vehículo porque habían unas personas heridas, cuestión que hizo, argumentando que no había escuchado ningún disparo. Acto seguido, sus compañeros subieron por la puerta trasera a los heridos, ordenándole su jefe que se dirigiera inmediatamente al Hospital de la ciudad. Añadió que al llegar a ese lugar, las dos personas fueron ingresadas a urgencia en unas camillas. Después ingresó el jefe con uno de sus compañeros, sin poder precisar cuál de ellos era, quienes regresaron al cabo de unos minutos, ordenándole el jefe volver a la unidad policial, para luego retornar a su domicilio. Añadió que al día siguiente se enteró que ambas personas habían fallecido, pues su jefe dio cuenta de ello a la superioridad institucional, al Fiscal de Carabineros Juan Salazar Lantery y al Juzgado respectivo. A fojas 172, manifestó que estos hechos ocurrieron aproximadamente a fines de septiembre de 1973, puesto que en octubre de ese año llegaron a la ciudad infantes de marina, quienes se hicieron cargo del patrullaje durante el toque de queda. Además, indicó que las personas heridas eran dos hombres de

mediana edad, quienes se encontraban en un sector rocoso de la playa. En diligencia de careo de fojas 413 con Fuentes Berrocal, reafirmó que él iba manejando el vehículo y no Fuentes Berrocal y que se quedó en todo momento al interior de éste. También dijo que efectivamente era el segundo funcionario más antiguo de la unidad, pero que no era el segundo jefe, término que no se empleaba en esa época. A fojas 1709, confesó que el parte policial agregado a la causa Rol N° 241/73, del Juzgado del Crimen de Tocopilla, fue firmado por él, pero que era un documento en blanco que puso a disposición de Fuentes Berrocal, quien lo confeccionó. Además, dijo que no portaban linternas ese día, reiteró no haber escuchado disparos y dijo que las víctimas no estuvieron detenidas en la unidad policial. En el cuaderno de documentos ordenado agregar a fojas 659 del Tomo II, consta su declaración policial y judicial efectuada en julio de 2002 y en diciembre de 2014, respectivamente, donde en relación al hecho investigado en este proceso señaló: "En una de las oportunidades que realizábamos un patrullaje en el sector norte de la ciudad, hacia las pesqueras, en un vehículo que conducía el señor Fuentes, tripulado por mi persona, Méndez, Salinas, Carmona y Avalos, no recordando que hubieran otros funcionarios. Al llegar a una playa del sector Norte, nos bajamos todos del vehículo, mientras el señor Fuentes junto a Carmona y Salinas, se fueron caminando por la playa y pasados unos minutos sentí unos disparos, por lo que fui en compañía de Ávalos a ver que sucedía percatándonos que muy cerca de ellos habían dos sujetos tendidos en el piso, al parecer muertos por heridas de balas, señalándome, los colegas, que estos no habían respondido a la voz de "ALTO" motivo por el cual le habían disparado, ignorando hasta la fecha quien fue el que lo hizo, como además de las personas que resultaron muertas, pero recordando que si eran

delincuentes habituales y que no tenían que ver con gremios o partidos políticos. De esta situación se dio cuenta a la Fiscalía Militar, llegando a posterior una Orden de Investigar del Juzgado de Tocopilla, para establecer los hechos, no recordando los resultados de ésta". En la misma declaración, más adelante, indicó que quería aclarar el párrafo en donde se señala sobre los hechos acontecidos en el sector norte de la playa de Tocopilla, en donde resultaron baleadas dos personas, diciendo que él nunca se bajó de la camioneta, hasta que fue llamado, ya que no podía dejar la camioneta sola por instrucción, llegando a ese lugar para trasladar a dichas personas al hospital.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que la participación de Sergio Méndez Henríquez se encuentra absolutamente demostrada, pues está confeso que formaba parte del grupo de funcionarios de la Policía de Investigaciones que dio "de baja" a las víctimas, siendo sus declaraciones prestadas en el proceso contradictorias en sí mismas, entre lo que expuso policialmente, ante funcionarios de su misma institución, que por lo demás se señala que él leyó, firmó y ratificó para constancia según se lee al final de dicha declaración, sabiendo las implicancias de esos dichos por su calidad de sub comisario en retiro de la Policía de Investigaciones, lo que obviamente no puede desdecir lo expresado doce años después sin dar mayores explicaciones; en todo caso, las explicaciones de haber conducido el vehículo o haberse bajado o no de él en el sector de la playa donde ellos situaron el sitio del doble homicidio, lo que se comprobó que es falso es irrelevante, lo que no lo es, sin embargo, es el hecho expuesto por Fuentes Berrocal que portaban una ametralladora o sub ametralladora y que Medel era quien la tenía en su poder esa noche; de esta manera, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal, las circunstancias que

invoca este acusado de no haber disparado esa noche, no están comprobadas en el proceso, por el tipo de lesiones según lo expuesto por el doctor Horacio Castillo podían corresponder a disparos de ametralladora y ellos, todo el grupo, portaban una de esas armas, además de las de puño oficiales, y sin entrar en el ámbito de las especulaciones, resulta lógico que el delito pudo haberse cometido en las afueras de la ciudad, donde abundan sitios desiertos para cometer ese tipo de asesinatos sin tener testigos ni riesgos de ser sorprendidos, hechos que por lo demás no fueron aislados en la ciudad de Tocopilla según se aprecia en el cuaderno separado de documentos tantas veces aludido, respecto de numerosos detenidos a los que se le aplicó la "ley de fuga" en esa época, incluso pocos días antes de estos hechos, donde habrían participado funcionarios no identificados de la Policía de Investigaciones según lo expuso Manuel Guillermo Guillén Muñoz a fojas 53 y 54 de ese legajo; por otra parte, por lo absurdo que representa la explicación dada a su firma puesta en el parte 551 de fojas 8 de los autos Rol N° 241/73 del Juzgado del Crimen de Tocopilla, no se dará valor alguno a las explicaciones dadas por este acusado para exculparse de la participación que se le atribuye, atendido al modo en que verosímilmente acaecieron los hechos, según los datos que arroja el proceso para apreciar los antecedentes.

Que, es conveniente tener presente que la atribución de responsabilidad no obedece únicamente a la circunstancia de pertenecer a la Policía de Investigaciones y ser parte de la Inspectoría de Tocopilla en la época en que ocurrieron los hechos, sino por formar parte directa del grupo que ultimó a las víctimas de acuerdo a su propia confesión, los dichos de coimputados, además de todas las circunstancias que se han referido y que se tuvieron por

comprobadas según se especificó en los motivos 41 y 42 precedentes.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que el acusado Ricardo Gilberto Gómez Centella declaró en el Tomo I a fojas 154 y 303; y a fojas 416 en careo con José Fuentes Berrocal. En el tomo II, a fojas 714 y en el tomo III, a fojas 1364.

Refirió que ingresó a la Escuela de la Policía de Investigaciones en 1965, siendo trasladado a Tocopilla en 1969. Recordó que para el 11 de septiembre de 1973 la unidad policial permaneció acuartelada alrededor de dos semanas, luego de las cuales retomaron sus funciones habituales, disponiéndose además la realización de patrullajes por control de toque de queda, pero sólo de forma esporádica, pues era carabineros quienes realizaban mayoritariamente esta función. Preciso que el toque de queda iniciaba a las 15:00 horas del día y finalizaba a las 6:00 horas del día siguiente. Expresó que el Prefecto de Carabineros, Luciano Astete Almendras, tomó el cargo de Gobernador y Jefe de Zona en Estado de Sitio, y que éste enviaba instrucciones al cuartel policial, donde también recibían órdenes del Fiscal de Carabineros, Juan Salazar Lantery. Hizo presente que hubo detenidos en el cuartel, pero que no recuerda haber participado en alguna detención en particular, negando categóricamente que se haya fusilado a personas al interior de la unidad, pues los detenidos eran puestos a disposición de la Fiscalía. A fojas 303 agregó que su cargo en ese entonces era Detective 2º, que los detenidos que llegaron a la unidad policial eran sólo por delitos comunes, pues los detenidos políticos eran aprehendidos por funcionarios de carabineros o militares, que las órdenes que les llegaban de la Fiscalía de Carabineros eran mínimas, desconociendo los hechos que las originaban, y que desconoce antecedentes de las víctimas de

la presente causa, pues no estuvieron detenidas en el cuartel. En diligencia de careo de fojas 416, aseguró no haber participado en los hechos relatados por Fuentes Berrocal en sus declaraciones. A fojas 714, tras ser consultado por la certificación de fojas 2 de la causa Rol N° 241-73, seguida ante el Juzgado de Letras Tocopilla, y que se mantiene a la vista en estos autos; dijo que es posible que haya estado de guardia ese día y por ello informó que Paredes fue dejado en libertad la tarde del 7 de octubre de 1973, pero que no lo recuerda. A fojas 1364, manifestó que sólo contaban con un vehículo policial, un jeep "Land Rover". Además, recordó que el día en que ocurrieron los hechos investigados el jefe de la unidad le ordenó mantenerse en la guardia, ya que todo el personal debía salir a trabajar, pues se habían escuchado unos disparos desde la playa, cuestión que no le consta ya que él no los escuchó. Añadió que, tras regresar sus colegas, le comentaron haber encontrado a dos personas con heridas de bala a quienes trasladaron a la posta y que fallecieron. Explicó que el servicio de guardia implicaba estar a cargo del cuartel por 24 horas, así como llevar el registro de detenidos y contestar el teléfono, pero que ese día no hubo detenidos en los calabozos, que no atendió a nadie que fuese a preguntar por algún detenido, y que solo se mantuvo de guardia por unas horas, hasta que sus colegas retornaron a la unidad. Indicó también que utilizaban un revólver calibre 38 y que en la guardia además había una subametralladora antigua, pero que nadie la usaba. También señaló que producto del Gobierno Militar del 11 de septiembre de 1973, todo el personal de la Unidad tuvo que mantenerse acuartelados por alrededor de dos meses, explica al efecto que permanecían en la unidad todo el día, dormían allí. En cuanto a las labores que a él le correspondía ejecutar indicó que se dedicaba a reunir información, algo

similar a inteligencia, y todo lo que obtenía lo remitía por medio de radiogramas a la Prefectura de Investigaciones de Antofagasta, esta información era relacionada con los sindicatos, los partidos políticos, directivas, entre otros antecedentes que el mando le solicitaba, para ello tenía que trabajar también en la calle, averiguando lo que se le pedía, ejemplo una elección o manifestación, lo que también obtenía por medio de amigos o policialmente a través de "un dedo" o informante, labor que desarrolló todo el tiempo que estuvo en Tocopilla, por lo que le fueron suprimidas las labores como los servicios de guardia, órdenes judiciales y labores operativas, aunque en algunas ocasiones le endosaron unas pocas órdenes judiciales, lo mismo su participación en algún patrullaje. Añadió que cuando ocurrió el hecho donde fallecieron estas dos personas y lo designaron para que se quedara en la guardia, ya de noche, no había detenidos en los calabozos. Admitió que pudo haberse "gestado" que informara que uno de los detenidos había quedado en libertad en horas de la tarde, porque debía responder el teléfono.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que a fojas 111 del legajo de documentos ordenado ordenar a fojas 659, consta declaración judicial efectuada en Iquique el 22 de diciembre de 2014, donde indicó que en el período del año 1973 se dedicaba a enlace de informaciones y tramitación de decretos judiciales en el cuartel de Policía de Investigaciones de Tocopilla, con el cargo de detective 2º, desempeñando funciones como recopilar los antecedentes de los sindicatos e informar a su superior jerárquico sobre ellos; añadió que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, permanecieron acuartelados y salían únicamente cuando cumplían decretos judiciales y en su labor como enlace de informaciones, le correspondía entregar información sobre los sindicatos existentes y acerca de personas que

pertenecían a partidos políticos en relación a las actividades gremiales, lo que entregaba a su superior y a funcionarios de Carabineros y al Ejército de la época. Agregó, asimismo, que en ocasiones durante esas fechas la entidad policial participaba en rondas que se realizaban después del toque de queda, pero solo eran respecto a efectuar averiguaciones si había personas con órdenes de detención pendientes o la verificación de hechos delictuales. Finalizó indicando que si una persona era sorprendida transitando después del toque de queda les correspondía ponerla a disposición del Juzgado del Crimen de Tocopilla.

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que, según su propia confesión Gómez Centella no era un funcionario más en la Inspectoría de la Policía de Investigaciones de Tocopilla, era el funcionario encargado de investigar a los opositores políticos del régimen recién instaurado, y así lo confirman, además, otros funcionarios de la misma unidad policial; en efecto, a fojas 81 del legajo de documentos citado, Nelson Ávalos Rauld, sostuvo que: "Dentro de estas instrucciones fue detener a todos los comunistas y socialistas, por cuanto en nuestros archivos de informaciones teníamos registrados a todos los dirigentes de estos partidos políticos, recordando que el detective GOMEZ quien era el encargado de esta información salía a realizar allanamientos a las casas, acompañado por nosotros y en unas ocasiones acompañados por unos infantes de la Armada de Chile, que llegaron a la zona en esas fechas. Estos operativos duraron hasta el mes de noviembre de ese mismo año, aclarando que respecto a los detenidos que muchos de ellos eran conocidos nuestros, eran trasladados a nuestro cuartel, ya que tenía dependencias amplias para esta labor, pero sin tomarles declaración, interrogatorios o someterlos a torturas, ya que solo, parte de la detención,

era la custodia" (esta declaración la ratificó a fojas 83 del mismo cuaderno doce años después, obviamente "aclarando" al final de su exposición que ellos "no detuvieron a nadie porque no estaban facultados" y que lo declarado ante funcionarios de la misma institución a la que él perteneció fue un "lapsus"). Del mismo modo Hernán Salinas Solari, según se lee a fojas 72 y 75 de dicho legajo, señaló: "...todas las instrucciones y órdenes que recibía la Policía de Investigaciones en la ciudad de Tocopilla provenían del Fiscal SALAZAR y el Gobernador ASTETE, las cuales eran dadas al señor Jefe de Unidad Inspector José FUENTES BERROCAL, quienes a los pocos días entregaron listados de gente, muchas de ellas con un solo nombre o con apodos que generalmente tenían muy pocos datos, razón por la cual eran entregados al Oficial enlace de informaciones el Detective 2do. Ricardo GÓMEZ CENTELLA, para posteriormente concurrir a detener a las personas a sus domicilios".

QUINCUGÉSIMO: Que, respecto de la participación en estos hechos del Comisario en retiro de la Policía de Investigaciones Ricardo Gómez Centella, además de todo lo que se indicó en los motivos 41 y 42, surgen en su contra los dichos de José Ricardo Fuentes Berrocal quien el 25 de febrero de 2002, según se consta a fojas 106 del cuaderno de documentos, junto con señalar la identidad de los funcionarios que trabajaban en la Inspectoría, de los que recordaba al Inspector Méndez, al Inspector o Primero Ríos, al Detective Carmona, al Detective Gómez y al Detective Salinas y que de acuerdo a las actividades impartidas por el fiscal, recordaba que en una oportunidad mientras se encontraba efectuando un patrullaje por toque de queda en compañía de los funcionarios Gómez, Salinas, Carmona, y Méndez el vehículo era conducido por él, y Gómez revisaba una lista de personas requeridas por los bandos, recordó

que al parecer se detuvieron y se sorprendió a unas personas a las cuales un funcionario les ordenó que se detuvieran gritándoles "ALTO", que al parecer no obedecieron y sintió una ráfaga de una subametralladora que llevaban, y seguidamente - indica que con muy malos recuerdos- se percataron que sobre el piso habían dos cuerpos, enseguida estos fueron llevados al Hospital para ser entregados en la morgue local. También señaló al final de su declaración judicial efectuada el 13 de mayo de 2008, que el Cuartel estaba conformado por 6 personas de nombre Sergio Méndez que era el 2do. Jefe, Osvaldo Carmona, un funcionario de apellido Salinas, otro de apellido Gómez y ellos lo acompañaban en toda labor policial que se efectuaba, quedando un funcionario a cargo de las comunicaciones y un administrativo, cuyos nombres no recuerda. Al deponer en estos autos a fojas 116, el 18 de abril de 2011, manifestó que en el mes de octubre de 1973, aproximadamente a la 1,00 horas de la madrugada, en circunstancias que realizaban un patrullaje por la ciudad, en el carro policial marca Jeep modelo Willy, junto a 4 funcionarios, entre quienes recuerda a Sergio Méndez, su segundo jefe, a Osvaldo Carmona Otero; Gómez y Salinas, quienes hacían la segunda pareja, para tal efecto, dejaban el vehículo policial estacionado en un determinado lugar y los funcionarios salían a caminar por las calles de la ciudad, recordando que ese día dejó estacionado el vehículo como a dos cuadras de la playa, separándose en parejas de dos detectives cada uno, mientras tanto él se quedó en el vehículo custodiando los lugares cercanos, una de las parejas estaba conformada por su segundo jefe Sergio Méndez y Osvaldo Carmona Otero y la otra pareja estaba conformada por Gómez y Salinas.

En los careos en que Fuentes Berrocal participó a fojas 413 y siguientes, señaló que iba en el grupo Gómez;

en efecto, a fojas 413 con Sergio Méndez Henríquez, afirmó que una de las parejas estaba compuesta por Gómez y Salinas, y eso no lo controvirtió Méndez Henríquez, a fojas 414 con Hernán Salinas, ratificó íntegramente sus declaraciones prestadas en la causa, y aunque admite que pueda estar equivocado en la secuencia de los hechos, no corrigió quienes integraban la patrulla, a fojas 418 en careo con Ricardo Gómez Centellas, volvió a ratificar sus declaraciones e insistió que en el grupo iba Gómez, e incluso señaló expresamente "ratifico mi declaración, Gómez aquí presente estuvo presente en ese procedimiento; en tanto que Gómez se limitó a señalar que no recordaba haber participado en un procedimiento así y que si hubiese participado lo recordaría. Recién a fojas 417 cuando fue confrontado con Osvaldo Carmona Otero, cuando éste afirmó que no estaba Gómez sino Ávalos, rectificó sus dichos.

Que, esa retractación de Fuentes Berrocal, después de haber afirmado reiteradamente que Gómez formaba parte del grupo, no tiene mayor valor, y esto porque si de algo valen los dichos de los acusados, que son componentes de la Inspectoría de Tocopilla, es para dar un indicio sobre la circunstancia de haber tenido contacto con las víctimas, puesto que ya se ha podido apreciar que sus versiones no son univocas y por el contrario, desde cada una de sus veredas trataron de desvincularse de la operación fáctica que consistió en el asesinato o en "la baja" de las víctimas, lo que ya ha sido destacado con antelación y a cada instante en esta sentencia, desde el lugar en que fueron ultimados las víctimas, la forma en que lo hicieron e incluso respecto de la negación de haber estado las víctimas bajo su potestad y arbitrio desde el día anterior a aquel en que los asesinaron y otros aspectos menores acerca del tipo de vehículo en que se movilizaban, porque mientras unos señalaron que tenían un Jeep Land Rover, otro

señaló que se trataba de un Jeep Willys, y otros de un Jeep Wagoner (en los partes policiales escribieron "Bagonir").

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, está suficientemente comprobado que fueron todos los integrantes de la Inspectoría quienes participaron activamente en el homicidio calificado de René Paredes y Vino Valdés, entre los que estaba incluido este acusado Ricardo Gilberto Gómez Centellas, sin que se haya registrado antecedente que permita excluirlo de los sujetos activos; al contrario, menos a él, porque se trataba del funcionario más comprometido en la persecuciones o purgas que se realizaron con posterioridad al golpe de estado en la ciudad de Tocopilla, aun sin que en este caso, no esté comprobado que el móvil de exterminio fuera el pensamiento político o la pertenencia a alguna agrupación de índole gremial que fuera opositor al régimen; sin embargo, está demostrado que se trataba de dos personas recién llegadas a la ciudad y los policías, conociendo a los avecindados en esa ciudad, pudieron visualizarlos como potencialmente opositores; y los motivos concretos que tuvieron para quitarles la vida, es algo que sólo los hechores conocen.

Gómez Centella, no pudo estar ajeno a lo que sucedió en esa Inspectoría los días 6 y 7 de octubre de 1973, y aun reconociendo que por la función que desempeñaba había sido relevado de las guardias y de otras actividades propias de la función policial, no existe la más mínima lógica en su versión en que indica que en esta oportunidad lo dejaron haciendo guardia mientras los demás concurren a eliminar a Paredes y Valdés, y por las funciones específicas que realizaba en que él era el encargado de reunir la información de los opositores políticos a la dictadura, si existió la necesidad de dejar a alguien de guardia, obviamente no debió ser él; por lo demás, todos ellos han

señalado que cuando salieron a "patrullar" no quedaron detenidos en la unidad policial, y aunque así fuera, de la inspección personal que realizó el tribunal al inmueble donde funcionaba la Inspectoría, se pudo establecer que habían varios calabozos con llave donde podían dejar asegurados a los detenidos que se encontraren en ese momento en la Inspectoría; por otra parte, además de los seis funcionarios policiales que formaban parte de esa unidad policial, de los dichos de Fuentes Berrocal y de algunos de los acusados, se comprobó que además había un funcionario encargado de las telecomunicaciones o radio operador, Bernardo Oliva Crescencio, y también el chofer Juan Mellado Escalona, lo que consta a fojas 65 del tantas veces citado legajo de documentos, o Marcial Tamayo Leiva, como señaló el propio Gómez Centellas a fojas 164; en suma, esos funcionarios perfectamente pudieron quedarse en la Unidad Policial mientras los policías que componían la Inspectoría concurrieron a tan nefasto propósito, al efecto hay que recordar que Fuentes Berrocal señaló que toda la dotación lo acompañaba cuando tenía que hacer alguna diligencia; asimismo, Fuentes Berrocal, en sus primeras declaraciones y en el careo con Gómez Centellas le hizo imputaciones directas de haber formado parte del grupo. Del mismo modo, se encuentra demostrado que Gómez Centella al día siguiente, a las doce treinta horas, según fue certificado por el ministro de fe del juzgado del crimen de Tocopilla, ante los requerimientos de información de esa funcionaria, señaló que efectivamente René Paredes había estado detenido en esa unidad, pero que había sido puesto en libertad el día anterior en horas de la tarde, esa intervención, que solo vino a confirmar la versión entregada pocos minutos antes de ese día 8 de octubre de 1973 al juez del tribunal por doña Alicia Villarroel Gálvez, también adoleció de una falsedad en cuanto a la

circunstancia de haber sido dejado en libertad René Paredes Cortínez, porque la señora Villarroel lo esperó hasta muy poco antes de comenzar el toque de queda y no fue liberado, y si así hubiese ocurrido, no era atendible las explicaciones inventadas para justificar el asesinato de haberse dado a la fuga al ser sorprendidos infringiendo el toque de queda, cuestión que ya ha sido latamente abordada en este fallo.

De esta manera, ha resultado probada completamente la participación en calidad de autor de Ricardo Gómez Centella en los hechos luctuosos que se han tenido por acreditados.

QUINCUGÉSIMO SEGUNDO: Que, en cuanto a la participación que se ha atribuido a **Luciano Astete Almendras**, cabe considerar que depuso a fojas 371, 418, 434 y 1708, y además en diligencia de careo con José Ricardo Fuentes Berrocal a fojas 419. Señaló que, para el 11 de septiembre de 1973, cumplía funciones como Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Tocopilla, siendo designado el 13 de ese mismo mes como Delegado de la Jefatura en Estado de Sitio. Indicó que las Comisarías de Tocopilla, María Elena y Pedro de Valdivia dependían directamente de él, y que existió un Servicio de Inteligencia de Carabineros que trabajó directamente con el Fiscal Militar, Juan Salazar Lantery, recordando entre sus integrantes a un Teniente de Carabineros. Consultado sobre los hechos investigados, expresó que, a través de la prensa de la época, tomó conocimiento de la muerte de dos personas por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Tocopilla, motivo por el cual, y atendido el cargo que ostentaba, llamó al Comisario de dicha unidad policial, cuyo nombre no recuerda, y le solicitó información sobre esos hechos, manifestando que éste le respondió que ya había dado cuenta de los mismos al Prefecto de Antofagasta, por lo que no

tenía nada que informar. Esta situación, según dijo, la representó a su Jefatura, pero no recibió el apoyo esperado, dando por zanjado el asunto, sin recordar más antecedentes al respecto. A fojas 418 dijo desconocer si estos hechos fueron informados a la Fiscalía o a las Policías de la época. En diligencia de careo de fojas 419 precisó que uno de sus ayudantes fue quien llamó a Fuentes Berrocal, siendo aquél quien le transmitió la respuesta de éste. A fojas 1708 dijo que él era el único encargado de informar a las autoridades y a la prensa de los hechos ocurridos, así como de firmar los documentos, pero que no tuvo conocimiento de lo que aconteció ese día, que sólo se enteró a partir de lo que su ayudante le señaló, que no tenía injerencia sobre las resoluciones emitidas por la Fiscalía, y que es efectivo que él dio la orden para que se realizara la autopsia a las víctimas, y que también firmó el certificado de defunción, antecedentes que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Militar. Negó haber dado órdenes a la Policía de Investigaciones.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que efectivamente, como consta de las fojas agregadas al cuaderno de documentos en custodia a fojas 1720, en la Calificación, remitida por Oficio N° 444 de fojas 1718, y en su Hoja de Vida de Oficiales y Personal Civil de Nombramiento Supremo, consta que el 12 de septiembre de 1973 fue nombrado Delegado de la Jefatura en Estado de Sitio de Antofagasta, y Gobernador del Departamento en la localidad de Tocopilla.

Así también, de los recortes de prensa del Diario "El Mercurio" de Antofagasta de 11 de octubre de 1973, acompañados a fojas 30, 31, 58, 59, 75 y 76 consta que fue el Prefecto de Carabineros, Teniente Coronel y Delegado Jefe de Zona en Estado de Sitio, Luciano Astete Almendras, quien emitió el comunicado que dio cuenta a la ciudadanía

del fallecimiento de las víctimas de autos a manos del personal de la Policía de Investigaciones de Tocopilla, víctimas a las que se califica como "delincuentes habituales", haciéndose referencia a otros datos, como edades y pseudónimos. Ello se contradice categóricamente con las primeras declaraciones prestadas por el acusado, en cuanto señaló que se enteró de estos hechos a través de la prensa, versión que modifica en una segunda declaración al referir que se lo comunicó el Jefe de la Policía de Investigaciones de Tocopilla y, finalmente, que no fue éste directamente, sino que su ayudante. Y, pese a que reconoce haber firmado los certificados médicos de defunción de ambas víctimas, agregados a fojas 97 y 71, aclaró que lo hizo por la información que su ayudante le transmitió, lo que resulta poco creíble, atendido el cargo que ostentaba, como máxima autoridad de la zona en estado de sitio, pareciendo que su descripción de dicha potestad sería la de un mero transmisor de la información que un subordinado le entregaba y que él, lisa y llanamente, se limitó a dar por cierta, sin tener injerencia ni control alguno sobre la actuación de las fuerzas de orden y seguridad puestas a su disposición por el régimen de facto.

QUINCUGÉSIMO CUARTO: Que en igual sentido, cabe tener presente lo señalado por José Ricardo Fuentes Berrocal, quien en lo pertinente, refirió haberse desempeñado como Jefe de la Inspectoría de Tocopilla para 1973 y que el 11 de septiembre de ese año tuvo una reunión en la Gobernación con el Mayor de Carabineros Astete, otro funcionario de apellido Salazar y el Capitán de Puerto de apellido Fuentes. Al día siguiente, se le comunicó por una circular del Fiscal de Carabineros que, tanto Salazar como un Mayor de Carabineros, se harían cargo de la Gobernación, y que éstos comenzarían a enviarle órdenes de detención contra personas subversivas, de preferencia dirigentes de

organismos públicos y empresas. Luego de ello, comenzaron a detener a personas que aparecían en un listado, para ser puestas a disposición del Fiscal de Carabineros, así como a controlar toques de queda. Refirió haber participado personalmente de estos procedimientos y que lo ocurrido era informado a carabineros. Sobre los hechos, declaró que un día de octubre de 1973, alrededor de la 01:00 a.m., mientras realizaban patrullajes en un jeep junto a los funcionarios de la Inspectoría Méndez, Carmona, Gómez y Salinas, encontrándose a dos cuadras de la playa, se separaron en parejas de dos detectives (Méndez con Carmona y Gómez con Salinas), quedándose él en el jeep, custodiando lugares cercanos, sintió 4 o 5 disparos y luego una ráfaga, viendo a Méndez con una metralleta, quien le informó que unos sujetos infractores del toque de queda no obedecieron la orden de detenerse, por lo que habían disparado al aire, y luego en su contra, una ráfaga. Agregó que se acercó a verificar la muerte de las personas, comunicándose con una ambulancia para que las trasladaran al Hospital. Luego volvieron al cuartel e informaron de lo ocurrido a la Fiscalía. Hace presente que en esa época también había en la zona militares del Regimiento Calama, como seguridad. Añadió que carabineros se presentaban en la unidad de la PDI a interrogar detenidos, sin tener conocimiento respecto del procedimiento que aplicaban. Los detenidos de la PDI eran puestos a disposición de la Fiscalía de Carabineros, ubicada en el segundo piso de la Comisaría. No recuerda si informó de los hechos al Prefecto de la PDI de Antofagasta, Sandoval Casanga. A fojas 412 añadió que los hechos fueron investigados por la Fiscalía, dándose cuenta a ellos de lo ocurrido. Agregó no recordar que el Prefecto Astete lo haya llamado por la publicación de prensa y que no prestó declaraciones en alguna investigación por este hecho.

En igual término, el acusado Osvaldo Carmona Otero, en declaraciones de fojas 159, 194, 417 y 1680, dijo que la Policía de Investigaciones continuó trabajando con los Tribunales de Justicia, pero además recibieron órdenes de la Fiscalía de Carabineros, realizaron controles por toque de queda y custodia de detenidos, los que eran conducidos al cuartel por funcionarios de carabineros o militares. El acusado Hernán Gilberto Salinas Solari, quien depuso a fojas 91, 174 y 414, refirió que días después del 11 de septiembre de 1973 se les comunicó que quedarían a disposición de la autoridad de Carabineros, entre ellos, del Fiscal de Carabineros Julio Salazar Lantery. Además, indicó que las autoridades civiles fueron relevadas de sus cargos, asumiendo en su lugar el Prefecto de Carabineros de apellido Astete. Ricardo Gilberto Gómez Centella, en tanto, en declaraciones de fojas 154, 303, 416, 714 y 1364, expresó que el Prefecto de Carabineros, Luciano Astete Almendras, tomó el cargo de Gobernador y Jefe de Zona en Estado de Sitio, y que éste enviaba instrucciones al cuartel policial, donde también recibían órdenes del Fiscal de Carabineros, Juan Salazar Lantery. Hizo presente que hubo detenidos en el cuartel, pero que éstos eran luego puestos a disposición de la Fiscalía. Sergio Leonardo Méndez Henríquez en declaraciones de fojas 156, 172, 413, 629 y 1709, detalló que, dentro de las funciones especiales que le tocó realizar, se encontró el control de toque de queda y el diligenciamiento de órdenes de detención provenientes de la Fiscalía de Carabineros.

QUINCUGÉSIMO QUINTO: Que frente a tales probanzas, la defensa del acusado Luciano Astete Almendras refirió que se determinó en la causa quiénes fueron los que detuvieron, interrogaron, trasladaron y dieron muerte a las víctimas, por un supuesto intento de fuga, y que en ninguna de esas situaciones participó, directa o indirectamente, su

defendido, siendo el único antecedente en su contra el hecho de haber dispuesto la vigencia de un toque de queda, en razón del cargo que ostentaba. Dijo que su representado nunca ordenó dar muerte a esas personas, que no tuvo contacto alguno con ellas y que sólo se enteró de sus muertes por información posterior recibida del Jefe de la Policía de Investigaciones de Tocopilla. Por otro lado, manifestó que los acusados fueron contestes al señalar que recibían instrucciones del Fiscal de Carabineros de la época, quien tenía dependencia directa del Primer Juzgado Militar de Antofagasta, y no de su defendido. Esgrimió que, en consecuencia, no existen presunciones fundadas para condenar a Astete Almendras con plena convicción, como autor, cómplice o encubridor de homicidio calificado.

QUINCUGÉSIMO SEXTO: Que en efecto, en la causa del Juzgado del Crimen de Tocopilla tantas veces citada, consta que la Policía de Investigaciones en el informe policial de fojas 8 de esos autos, informó que los antecedentes fueron puestos a disposición del Primer Juzgado Militar de Carabineros en Tiempos de Guerra; documento que suscrito por Méndez Henríquez y Fuentes Berrocal su veracidad es cuestionable; al respecto es preciso rememorar que ninguno de los funcionarios que intervinieron en los hechos fueron llamados a declarar a la Fiscalía, ni a otro lugar o estamento judicial o militar; y en el evento que ello fuera verdad y que efectivamente se hubieren puesto los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía de Carabineros como allí se expresa, no hay explicación de por qué no fue el Fiscal Militar, sino el acusado, quien firmó los certificados de defunción de ambas víctimas.

Que, sin perjuicio de lo anterior, y considerando que la prueba que existe respecto de las actuaciones que le correspondió realizar a Astete Almendras con ocasión de los

hechos aquí investigados no dice relación con alguna orden directa o precisa, que haya provenido de quien a la fecha era Teniente Coronel de Carabineros, Delegado del Jefe de Zona en Estado de Sitio y Gobernador de Tocopilla, para detener e interrogar a René Paredes Cortínez y a Vino Fidel Valdés Morales, y tampoco hay antecedentes que permitan dar por probado que al ser detenidos y estar bajo la custodia de la Inspectoría de Investigaciones Astete haya tomado conocimiento de esa circunstancia y que, en esas condiciones, haya dispuesto su aniquilamiento en la forma que ello aconteció, sin que ello pueda deducirse de lo expuesto por los funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes señalaron que se dispuso la detención de varios sujetos por orden de la autoridad, sin especificar que dentro de esas personas se encontraban las dos víctimas de este proceso, considerando además que no se aportaron antecedentes que éstos fueren activistas políticos o sindicales, obedeciendo su detención al parecer, como sostuvo doña Alicia Villarroel, a las circunstancias de ser gente desconocida en la ciudad de Tocopilla, ya que Paredes había arribado hacía poco tiempo a esa ciudad desde Antofagasta y Valdés unos días antes desde la ciudad de Iquique.

Que entonces la participación de Astete queda reducida a las actividades que desplegó con posterioridad al acaecimiento de los hechos, y particularmente al momento en que comunica a los medios de comunicación la muerte de Paredes y Valdés, lo que aconteció al día siguiente de los asesinatos; y también a su intervención suscribiendo los certificados médicos de defunción, que rolan a fojas 25 y 56, que fueron confeccionados el 10 y 9 de octubre de 1973, respectivamente, lo que por razones obvias es posterior a la data del asesinato.

De la misma manera, sus afirmaciones efectuadas en la declaración policial de fojas 57 del tantas veces citado legajo de documentos de ser responsable de todo lo que sucediera en su jurisdicción, no implica necesariamente que deba responder sobre todos los hechos luctuosos que se cometieron en Tocopilla, salvo aquellos en los que sí tuvo participación por haber dado las ordenes de ejecutar a los detenidos o por haberlo hecho él directamente.

Las acciones que ejecutó en forma directa Astete Almendras, esto es, el comunicado y la suscripción del certificado médico de defunción, así como la omisión de realizar las investigaciones u ordenar que se indagara las circunstancias en que acontecieron los hechos que se pusieron en su conocimiento, de lo que se colige que contribuyó a colocar un manto de impunidad al asesinato ejecutado por los miembros de la Inspectoría de la Policía de Investigaciones de Tocopilla, constituyen actos de encubrimiento de los delitos de homicidio calificado de René Paredes Cortínez y de Vino Valdés Morales y no su autoría.

QUINCUGÉSIMO SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, los hechos descritos en el libelo acusatorio no contienen la descripción fáctica que podría atribuírsele a este acusado, pues en ellos no se detallan las actuaciones que realmente realizó, de tal manera que, de conformidad al principio de congruencia y a la jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema, el vicio de ultra petita en materia penal se produce cuando la sentencia se extiende a puntos inconexos con los que han sido objeto de la acusación y la defensa, es decir, cuando el fallo que se impugna abarca hechos distintos de los que han discutido las partes en la acusación y contestación, de modo que el acusado resulte condenado por hechos distintos, ajenos al

juicio criminal. En consecuencia, para que se produzca el vicio denunciado, debe existir una falta de correspondencia entre el hecho material que se imputa al acusado y el que posteriormente sirve de fundamento a la condena, aun cuando la calificación jurídica sea distinta. De este modo, las acciones y omisiones descritas en el motivo precedente, constituyen una serie de conductas, acciones o verbos rectores, que exceden la acusación y que importan nuevos hechos, distintos, en su esencia, de aquéllos que se describieron en el auto de cargos.

En efecto, en la especie no se trataría de la "calificación jurídica de los hechos", sino de la declaración de hechos nuevos que se adicionarían a los antecedentes establecidos, puesto que, en primer lugar se multiplicarían los actos, y se abandonarían los extremos de los consignados en la acusación, claramente vinculados a los previstos en los tipos de los delitos imputados. Es así que la acusación no postuló como objeto de prueba, a modo de ejemplo, *"ocultar o inutilizar el cuerpo, los efectos o instrumentos de los delitos para impedir su descubrimiento, para albergar, ocultar o proporcionar la fuga del inculpado, para acogerlo o protegerlo"*. Si bien el sistema del Código de Procedimiento Penal autoriza dar una nueva calificación jurídica a los hechos, lo que se acaba de destacar sobrepasa ésta posibilidad, desde que no han podido ser comprendidos en las defensas, y actuar de esta manera excedería el margen de la potestad acusadora de este tribunal, inequívocamente extinguida con la dictación de la acusación.

De esta manera, no cabe sino dictar sentencia absolutoria respecto de Luciano Astete Almendras de la participación atribuida como autor de los delitos de

homicidio calificado de René Paredes Cortínez y Vino Fidel Valdés Morales.

EN RELACIÓN A LAS CONTESTACION DE LAS ACUSACIONES:

QUINCUGÉSIMO OCTAVO: Que a fojas 1.942 el abogado Juan Carlos Manns Giglio, en representación de los acusados Sergio Leonardo Méndez Henríquez y Ricardo Gilberto Gómez Centella, contestó la acusación fiscal y las acusaciones particulares. Solicitó la absolución de sus representados porque, en su concepto, no concurren los elementos necesarios para dar por establecida su participación. Preciso que no consta que las víctimas efectivamente hayan permanecido detenidas al interior del cuartel policial, lo que pudo ocurrir o no; agregando que en Tocopilla quienes efectuaban rondas y patrullajes, por el estado de excepción constitucional, eran funcionarios de Carabineros, Ejército y la Marina, limitándose la Policía de Investigaciones a realizar pesquisas sobre delitos comunes y sus rondas, en ese aspecto, lo eran en base a ese objetivo. Señaló que, según se desprende de los antecedentes de esta causa y de la causa Rol N° 2182-98 "Tocopilla", que instruyó el Ministro en Visita Sr. Mario Carroza Espinosa, Fuentes Berrocal se entendía directamente con Carabineros, sin ocupar al personal policial bajo su mando en los operativos que involucraron transgresiones probables a los derechos humanos, por lo que éstos no tenían conocimiento alguno sobre esos hechos. En ese sentido, dijo que no resulta lógico atribuir a sus defendidos la autoría de los disparos que recibieron las víctimas, puesto que no se entiende que les disparen e inmediatamente los trasladen al Hospital, menos cuando ellos no tenían tutela alguna con el orden excepcional existente, que radicaba en el Jefe de Plaza Luciano Astete y el Fiscal Militar Juan de Dios Salazar, además de las Fuerzas de la Marina y Ejército que

patrullaban Tocopilla; a lo que se suman las declaraciones de testigos de la causa que darían cuenta que, en la fecha en que se encontraron los heridos, no se escucharon disparos ni en el cuartel policial, ni en el borde costero de la ciudad; y la inexistencia de pericias que permitan determinar si las víctimas llegaron heridas o muertas al Hospital. De este modo, la participación de sus representados no estaría acreditada, siendo insuficiente para condenar una presunción o mera sospecha, debiendo entonces ser absueltos.

QUINCUGÉSIMO NOVENO: Que, de conformidad a los antecedentes y fundamentos referidos y analizados en los motivos 24 a 37, 41 y 42 y 45 a 53, se desestimaré la petición de absolución formulada por el defensor de estos dos acusados; al efecto cabe reiterar que sin perjuicio de coincidir con este defensor acerca de no haber situado en las dependencias de la Inspectoría la ocurrencia de los hechos que terminaron con la existencia de las víctimas, porque ese edificio se encontraba cercano a muchos inmuebles habitados, y así lo confirmó la testigo presentada por esa misma parte doña Olga María Cintolessi Serazzi, a fojas 2308 y 2310; del mismo modo también se desestimó que los hechos ocurrieran en el borde costero según lo señalaron varios de los acusados, y también se informó a la prensa en la época y se comunicó al Juzgado del Crimen de Tocopilla. Todas las conclusiones de la defensa parten del supuesto que las víctimas no estuvieron detenidas en la Inspectoría, lo que es errado y se comprobó con el instrumento público consistente en el expediente del Juzgado del Crimen de Tocopilla, tantas veces citado, según ya se estableció categóricamente en esta sentencia; la circunstancia de que doña Alicia Villarroel no hubiere reconocido en el careo de 629 a Sergio Méndez Henríquez, como el sujeto que le informó que su pareja y Vino Valdés

estaban detenidos en la Inspectoría y que le señaló que debía llevarle una frazada y algo de comer, no es de extrañar, porque el tiempo transcurrido bien pudo dificultar ese reconocimiento, lo que ella misma señaló en esa oportunidad. La circunstancia alegada de que a las víctimas las llevaron al Hospital porque estaban heridas, no resiste un análisis serio, los dos certificados médicos de defunción hablan de múltiples heridas a bala y quien hizo esos certificados señaló que cuando revisó los cuerpos tenían más de treinta balazos cada uno; es evidente que llevaron a las víctimas al Hospital porque ahí mismo funcionaba la morgue. En cuanto a lo increíble que podría haber resultado que ellos mismos llevaran a las víctimas a la morgue después de asesinarlas, no debería ser tan extraño, pues en la misma causa que cita el abogado defensor tramitada por el Ministro Sr. Carroza en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde también actuó defendiendo a imputados en esos hechos, a dos de los detenidos acribillados los llevaron también al hospital diciendo que les habían disparado porque querían darse a la fuga, además de los otros detenidos que asesinaron y dejaron en el interior de la mina, respecto de los que informaron se habrían dado a la fuga y esto consta de los documentos agregados en el cuaderno de documentos de fojas 659, en otras palabras, en esa época, la impunidad de quienes tenían el poder era tan grosera que no debe extrañarse que llevaran a las dos víctimas de este proceso a la morgue y, sin descaro, dijeran que les dispararon porque pretendieron darse a la fuga al haber estado infringiendo el toque de queda, en circunstancias que todas las balas habían ingresado por la parte delantera del cuerpo.

SEXAGÉSIMO: Que a fojas 1.956 la abogada Katherine Gnecco Sandoval, en representación del acusado Osvaldo Carmona Otero, contestó la acusación fiscal y acusaciones

particulares, indicando que la acusación del Tribunal no señala, del modo establecido en el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal, cuál habría sido la conducta precisa o la participación que le cabría a su representado en los hechos, ni tampoco expresa los antecedentes probatorios que servirían para acreditar el hecho y la participación que se le imputa, pues aquellos que se mencionan como elementos de cargo, en realidad no serían tales. Agregó que del proceso consta que las víctimas fueron detenidas por efectivos militares de la época y no por personal de la Inspectoría; y que las declaraciones de los acusados son contestes en señalar la dinámica del procedimiento que se llevó a cabo en el borde costero de la ciudad, sin que ninguno de ellos se atribuya responsabilidad en los mismos, la que no corresponde presumir. Arguyó que, si las personas que se encontraron hubiesen estado muertas, los acusados tendrían que haber cercado el sitio del suceso e investigado el hecho y no llevarlas al Hospital; que no se explica la finalidad de trasladarlas a ese lugar luego de asesinarlas, por lo que la concurrencia al Hospital sólo se entiende porque las víctimas estaban heridas. También refirió que el jefe de la unidad policial, José Fuentes Berrocal, mantenía relaciones directas con Carabineros y Militares que se encontraban en la ciudad en aquella época, sin que sus subordinados policiales intervinieran en alguna decisión sobre detenciones o en hechos de muerte, lo que se vería corroborado por antecedentes de esta causa y de la causa Rol N° 2182-98 "Tocopilla" del Ministro en Visita Sr. Mario Carroza, hechos que igualmente acaecieron en octubre de 1973, y por los que su representado fue absuelto. Añadió que Fuentes Berrocal formuló declaraciones en el proceso que fueron cambiando con el tiempo, perdiendo así toda credibilidad. Así, la participación de su defendido sólo se

ha tenido por establecida a través de suposiciones que no logran superar el estándar exigido por el legislador para condenar, por lo que deberá ser absuelto. En subsidio, pidió que se recalifique su participación a la de encubridor o cómplice, al no poder encuadrarse su actuar dentro de las hipótesis de autoría del artículo 15 del Código Penal. En ese sentido, explicó que el acusado sólo ha reconocido haber sido funcionario de la Policía de Investigaciones de Tocopilla a la época, sin que exista otro antecedente controvertido, serio y suficiente que dé cuenta que estuvo presente en el lugar o al momento en que se dio muerte a las víctimas, o bien, que hubiera cooperado concertado para dicha acción, o que hubiera disparado a los detenidos, lo que indica la imposibilidad de una participación en calidad de autor directo o mediato.

SEXAGÉSIMO PRIMERO: Que, de conformidad a lo expuesto en los motivos 24 a 37, 41 y 42 y 45 a 53, se desestimaré la petición de absolución formulada por la defensora de este acusado. En efecto, al contestar la acusación se reprochó el auto acusatorio por -según la defensora- adolecer de vicios, sin embargo no se explicó en qué consisten dichas falencias; ni se mencionó porqué todos los antecedentes que se exponen en el motivo primero de esa resolución no satisfacen la exigencia legal; y como se vio en los razonamientos aludidos ut supra, la exposición y desarrollo de esos medios probatorios, en este fallo, han demostrado en forma completa la existencia de los hechos y la forma en que acaecieron y, en cuanto a la participación de este procesado, los elementos de cargo señalados en ese mismo motivo, unidos a los dichos de los demás coimputados demuestran fehacientemente su participación en los hechos luctuosos que terminaron con la vida de René Paredes y de Vino Valdés.

Las alegaciones sobre que las víctimas fueron llevadas al Hospital, han sido completamente explicadas y ello obedeció a que en ese mismo recinto, funcionaba también la morgue de Tocopilla, hasta donde llevaron a las víctimas, quienes fueron acribilladas con más de treinta balazos cada una, las elucubraciones que realiza Carmona en su informe sobre las vendas en el cuerpo de Paredes y la rigidez del cuerpo, en primer término, hay que tener en cuenta que doña Alicia Villarroel a la época se encontraba en un avanzado estado de gravidez, recién había tomado conocimiento del asesinato del padre del hijo que esperaba y según ella misma lo expresó a fojas 522, cuando vio el cadáver de su pareja se desmayó y al respecto cuando depuso a fojas 1410, señaló que las vendas no tenían tanta sangre, que eran vendas limpias, de manera que hay que atender a lo que ella en esas condiciones pudo captar y de hecho, este tribunal ha considerado su testimonio exclusivamente para los efectos de determinar que vio a René Paredes en la morgue del Hospital sin vida y son otros los antecedentes que han servido para determinar la causa de la muerte de las víctimas. Del mismo modo, los cargos que se le atribuyen exclusivamente al fallecido José Fuentes Berrocal, quien ahora no puede rebatirlos, resultan absurdos y carentes de lógica, resultando incomprensible que él se hubiere avocado exclusivamente a la persecución política de los opositores al régimen y que de esa función haya dejado afuera a los demás miembros de la Inspectoría, al respecto y solo a modo de ejemplo vale traer a colación las afirmaciones de Nelson Avalos Rauld a fojas 81 del legajo de documentos tantas veces citado, cuando expresó: "Dentro de estas instrucciones fue detener a todos los comunistas y socialistas, por cuanto en nuestros archivos de informaciones teníamos registrados a todos los dirigentes de estos partidos políticos, recordando que el detective

Gómez, quien era el encargado de esta información salía a realizar allanamientos a las casas, acompañado por nosotros y en unas ocasiones acompañados por unos infantes de la Armada de Chile, que llegaron a la zona en esas fechas. Estos operativos duraron hasta el mes de noviembre de ese mismo año, aclarando respecto a los detenidos que muchos de ellos eran conocidos nuestros, eran trasladados a nuestro cuartel, ya que tenía dependencias amplias para esta labor, pero sin tomarles declaración, interrogatorios o someterlos a torturas...." En el mismo sentido, Sergio Méndez Henríquez a fojas 86 de ese legajo, el año 2002, culpa directamente de haber efectuado el disparo contra las víctimas a Fuentes, Carmona y Salinas, aunque indicó que no sabía cuál de los tres había disparado.

Que, por otra parte, si los hechos hubiesen ocurrido de la forma como urdieron -con más o menos diferencias- los integrantes de la Inspectoría, y teniendo en cuenta que según ellos se trataría de delincuentes comunes, lo que se esperaba era que cumplieran con sus deberes policiales, ya sea que hubiesen disparado ellos u otros y, en consecuencia, debieron haber aislado el sitio del suceso y remitido el parte policial respectivo al Juzgado del Crimen de Tocopilla o a la Fiscalía Militar, lo que no hicieron. Claro, nada de eso sería exigible en la fábula de Carmona, quien los vio de pie, saltando, uno de ellos muy conversador y ambos, -como se probó con declaraciones de testigos presenciales del estado en que quedaron los cuerpos y con los instrumentos públicos que ya se han referido- "con treinta proyectiles en el cuerpo".

Habiéndose demostrado en forma categórica la participación en calidad de autor inmediato y directo de conformidad a lo previsto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, de este acusado se desestimará la petición

subsidiaria de considerarlo cómplice o encubridor, porque a mayor abundamiento, respecto de la complicidad no se argumentó respecto a cuales serían sus conductas colaborativas previas o coetáneas y en el caso del encubrimiento, en cuál de las conductas descritas en el artículo 17 del Código Penal habría incurrido y de qué forma.

EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Que la abogada querellante Adriana Rojas Pérez, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, a fojas 1.905, dedujo su acusación particular en el sentido que se considere la concurrencia de las agravantes establecidas en los numerales 8, 10 y 11 del artículo 12 del Código Penal, estas son, prevalecerse del carácter público que tenga el culpable; ejecutar el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia; y ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad, respectivamente. Por lo anterior, solicita se imponga a los acusados las penas de presidio perpetuo, más accesorias legales y costas.

Que no perjudica a los acusados la circunstancia agravante de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 12 N° 8 del Código Penal, esto es, prevalencia del carácter público, esgrimida, toda vez que si bien éstos, al momento de cometer el delito detentaban la calidad de miembros de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Punitivo, dicha causal de agravación es incompatible con el delito que nos ocupa, un crimen de lesa humanidad, en que el abuso de la calidad de funcionario público -agente del

Estado- constituye un elemento integrante del tipo. Lo mismo sucede con la causal prevista en el numeral 10, y la circunstancia de no haberse realizado investigación judicial para determinar las muertes lo que vino a amparar la impunidad de los homicidios cometidos, dice relación precisamente con la descripción de estos delitos como de lesa humanidad, no obstante que las víctimas no tuvieran la calidad de miembros de algún partido político o sindical que fuere perseguido por las fuerzas en el poder en ese momento. En cuanto a la agravante de haber cometido el delito de noche o en despoblado, que el tribunal puede tomar o no en consideración, según la naturaleza y accidentes del delito, según lo previene el numeral 12 del artículo 12 del Código Penal, tampoco se considerará para aumentar la penalidad de los hechos, desde que al igual que las dos anteriores, son circunstancias incompatibles con los delitos de lesa humanidad y son ventajas que aprovecharon los hechos debidas a la condición de funcionarios policiales que ostentaban.

SEXAGÉSIMO TERCERO: Que el abogado querellante Álvaro Aburto Guerrero, en representación del Programa de Derechos Humanos, dedujo acusación particular en relación a la concurrencia de circunstancias agravantes previstas en los numerales 8 y 12 del artículo 12 del Código Penal, las que consisten en prevalecerse del carácter público que tenga el culpable; y ejecutarlo de noche o en despoblado, respectivamente, solicitando asimismo la aplicación de la regla de reiteración de delitos prevista en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Pidió que se les impusieran las penas de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales y costas.

SEXAGÉSIMO CUARTO: Que, por las mismas razones señaladas respecto de ambas circunstancias agravantes en el

fundamento 62, se desestimarán las formuladas por este querellante.

SEXAGÉSIMO QUINTO: Que a fojas 1.942 el abogado Juan Carlos Manns Giglio, en representación de los acusados Sergio Leonardo Méndez Henríquez, y Ricardo Jilberto Gómez Centella, invocó la atenuante de responsabilidad del artículo 11 N° 6 del Código Penal, por carecer sus defendidos de antecedentes pretéritos reprochables; y solicitó se les aplique lo previsto en el artículo 103 del Código Penal, por haberse cumplido más de la mitad del plazo para la prescripción del delito. Así, debiendo aplicarse dos o más atenuantes calificadas y ninguna agravante, y conforme además a lo previsto en el inciso tercero del artículo 68 del Código Penal, deberá rebajarse la pena impuesta en uno, dos o tres grados, quedando en la de tres años y un día, y concederse los beneficios de la Ley 18.216, cumpliendo la pena alternativa de libertad vigilada.

Que con el mérito del extracto de filiación y antecedentes de Sergio Leonardo Méndez Henríquez de fojas 958 y de Ricardo Jilberto Gómez Centella, de fojas 1328, exentos de anotaciones pretéritas a la época de los hechos investigados en este proceso, se reconocerá a ambos la atenuante de Irreprochable conducta anterior, prevista en el número 6 del artículo 11 del Código Penal.

En cuanto a la circunstancia prevista en el artículo 103 del Código Penal la referida alegación no será aceptada respecto del delito de homicidio calificado, por cuanto la media prescripción, para que opere, está relacionada con el transcurso incompleto del tiempo necesario para extinguir la responsabilidad por prescripción de la acción penal y siempre requiere de un inicio del cómputo para los efectos de concluir que ha transcurrido más de la mitad del plazo

de prescripción; sin embargo, al haberse establecido que el delito investigado en autos es un delito de lesa humanidad, este tiene por expresa disposición normativa el carácter de imprescriptible, por ende, no hay plazo alguno que contabilizar.

Que, además, para que opere la aplicación de la prescripción gradual, el legislador exige que haya transcurrido la mitad del tiempo necesario para la prescripción de la acción penal o de la pena y que el transcurso del tiempo exigido por la norma se verifique antes de que el responsable se presente o sea habido. De lo anterior se desprende que el artículo 103 del Código Punitivo opera respecto de procesados que se encontraban ausentes durante el desarrollo del proceso, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que los acusados Méndez y Gómez Centella estuvieron siempre presentes en el juicio, nunca ausente o rebelde.

Tanto la prescripción como la prescripción gradual benefician al responsable de un delito en consideración a los efectos que provoca el transcurso del tiempo en la necesidad de la pena, la estabilidad social y la seguridad jurídica, efectos que no se presentan respecto de los delitos declarados imprescriptibles.

Por las razones expuestas se rechaza la aplicación de la prescripción gradual, contemplada en el artículo 103 del Código Penal.

SEXAGÉSIMO SEXTO: Que la abogada Katherine Gnecco Sandoval, en representación del acusado Osvaldo Carmona Otero invocó las circunstancias atenuantes de los numerales 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal, estas son: su irreprochable conducta anterior, que consta de antecedentes sociales y profesionales, así como de su extracto de

filiación; y la colaboración sustancial, que se verifica con la voluntad que prestó siempre su representado en el esclarecimiento de los hechos, aportando, en todas y cada una de las ocasiones que fue requerido, antecedentes relevantes, colaborando con informes en razón a sus conocimientos en criminalística y su calidad de Ex Jefe Nacional de Homicidios. Pidió también que se le aplique lo prescrito en el artículo 103 del Código Penal, norma de orden público y de carácter imperativo que debe ser observada por el juzgador conforme al principio de legalidad, por haber transcurrido más de la mitad del tiempo de prescripción de los delitos investigados. Por último, solicitó se le otorgue alguno de los beneficios contemplados en la Ley 18.216.

Que con el mérito del extracto de filiación y antecedentes de Osvaldo Carmona Otero de fojas 937, exento de anotaciones pretéritas a la época de los hechos investigados en este proceso, se reconocerá en beneficio de este acusado la atenuante de Irreprochable conducta anterior, prevista en el número 6 del artículo 11 del Código Penal.

Que, no se acogerá en cambio la circunstancia atenuante prevista en el número 9 del artículo 11 del Código Penal, porque sus declaraciones e incluso el informe que hizo lo fue en afán de enturbiar y no de ayudar en el esclarecimiento de los hechos.

En cuanto a la circunstancia prevista en el artículo 103 del Código Penal la referida alegación no será aceptada respecto del delito de homicidio calificado, por cuanto la media prescripción, para que opere, está relacionada con el transcurso incompleto del tiempo necesario para extinguir la responsabilidad por prescripción de la acción penal y siempre requiere de un inicio del cómputo para los efectos

de concluir que ha transcurrido más de la mitad del plazo de prescripción; sin embargo, al haberse establecido que el delito investigado en autos es un delito de lesa humanidad, este tiene por expresa disposición normativa el carácter de imprescriptible, por ende, no hay plazo alguno que contabilizar.

Que, además, para que opere la aplicación de la prescripción gradual, el legislador exige que haya transcurrido la mitad del tiempo necesario para la prescripción de la acción penal o de la pena y que el transcurso del tiempo exigido por la norma se verifique antes de que el responsable se presente o sea habido. De lo anterior se desprende que el artículo 103 del Código Punitivo opera respecto de procesados que se encontraban ausentes durante el desarrollo del proceso, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que el acusado Carmona Otero estuvo siempre presente en el juicio, nunca ausente o rebelde.

Tanto la prescripción como la prescripción gradual benefician al responsable de un delito en consideración a los efectos que provoca el transcurso del tiempo en la necesidad de la pena, la estabilidad social y la seguridad jurídica, efectos que no se presentan respecto de los delitos declarados imprescriptibles.

En suma, para el rechazo de esta alegación se atiende por una parte, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de ius cogens provenientes de esa órbita del

Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo.

Pero junto con ello, se subraya que cualquiera sea la interpretación que pueda hacerse del fundamento del precepto legal en discusión, es lo cierto que las normas a las que se remite el artículo 103, otorgan una mera facultad al juez y no le imponen la obligación de disminuir la cuantía de la pena aunque concurran varias atenuantes (Sentencias Corte Suprema Rol N° 35.788-17, de 20 de marzo de 2018 y Rol N° 39.732-17, de 14 de mayo de 2018).

DETERMINACIÓN DE LA PENA

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Que los acusados han sido declarados culpables de dos delitos de homicidio calificado en las personas de René Paredes Cortínez y de Vino Fidel Valdés Morales, y a los tres les beneficia una circunstancia atenuante y no los perjudican agravantes.

La pena prevista para el delito de homicidio calificado en el N°1 del artículo 391 del Código Penal, va de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, esto es, comienza en los diez años y un día. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, en los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie, se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno, dos o tres grados. En la especie, la pena contemplada para cada delito, concurriendo una circunstancia atenuante no puede aplicarse en su máximo de conformidad a lo previsto en el inciso 2° del artículo 68 del código punitivo. Considerando la pena en su mínimo,

esto es en diez años y un día y aumentándola en un grado por la reiteración, la pena que se impondrá a cada uno de los sentenciados es la de presidio mayor en su grado medio.

De conformidad a la entidad de la pena que se impondrá no procede emitir pronunciamiento favorable a su cumplimiento de acuerdo a las formas alternativas de cumplimiento de la pena previstas en la ley 18.216.

SEXAGÉSIMO OCTAVO: Que, asimismo, conforme a lo ordenado por los artículos 24 del Código Penal y 504 del Código de Procedimiento Penal, los sentenciados serán obligados al pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 11 N° 6, 14 N° 1, 15 N° 1, 16, 18, 24, 26, 28, 50, 51, 68 inciso 2°, 69 y 391 N°1 del Código Penal y 10, 50, 108 a 114, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 459, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 510 y 533 del Código de Procedimiento Penal, se declara:

I.- Que **se rechazan** las excepciones de previo y especial pronunciamiento y las mismas excepciones opuestas como defensas de fondo deducidas por la abogada defensora del acusado Carmona Otero a fojas 1956 y siguientes y por el defensor de Luciano Astete Almendras, a fojas 2000 y siguientes.

II.-Que se **ABSUELVE** al acusado LUCIANO ASTETE ALMENDRAS, ya individualizado, de la acusación formulada en su contra de ser autor de los delitos de homicidio calificado de René Paredes Cortinez y de Vino Fidel Valdés Morales.

III.- Que se **CONDENAN** a OSVALDO CARMONA OTERO, SERGIO MÉNDEZ HENRÍQUEZ y a RICARDO JILBERTO GÓMEZ CENTELLA,

calidad de autores de los delitos de homicidio calificado, en grado consumado, de René Paredes Cortinez y de Vino Fidel Valdés Morales, cometidos el día 07 de octubre de 1973, a la pena de **QUINCE AÑOS Y UN DÍA** de presidio mayor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y al pago de las costas de la causa.

La sanción impuesta se cumplirá de manera real y efectiva y se contará desde que los sentenciados se presenten o sean habidos, debiendo servir de abono el tiempo que estuvieron privados de libertad con ocasión de este proceso, esto es, Osvaldo Carmona Otero desde el 6 de febrero de 2017, al 15 de febrero de 2017, según consta de fojas 914 y 1.153, respectivamente, en un total de diez días. Sergio Méndez Henríquez, desde el 7 de febrero de 2017, al 15 del mismo mes y año, según consta de fojas 974 y 1.153 respectivamente, en un total de 9 días; y Ricardo Jilberto Gómez Centella, desde el 27 de junio de 2017, al 30 del mismo mes y año, según consta de fojas 1376 y 1.402, respectivamente, en un total de 4 días.

IV. Consúltese el sobreseimiento definitivo de fojas 1319.

Notifíquese personalmente a los sentenciados.

Notifíquese a los apoderados de las partes, por intermedio del receptor de turno del presente mes y/o por el Centro Integrado de Notificaciones de esta jurisdicción. Exhórtese al Primer Juzgado de Letras de Antofagasta y al Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago respecto de los apoderados que registran domicilio en esas ciudades.

Ejecutoriada que sea la sentencia, cúmplase con lo dispuesto por el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese y consúltese, si no se apelare.

Rol N° 1-2011 (Antofagasta)

PRONUNCIADA POR EL MINISTRO EN VISITA EXTRAORDINARIA
DON VICENTE HORMAZÁBAL ABARZÚA Y AUTORIZADA POR DOÑA
SOLEDAD SEPÚLVEDA FONCK, SECRETARIA SUBROGANTE.